

CONTRARREVOLUCIÓN

INVESTIGACIÓN

DERECHOS DE AUTOR: La Ley Federal de Derechos de Autor cita: Artículo 5.- La protección que otorga esta Ley se concede a las obras desde el momento en que han sido fijadas en un soporte material, del mérito, destino o modo de expresión. "RE.R". ©; A favor de la persona que para proteger su identidad utiliza el seudónimo "ministro" y tiene fecha de nacimiento 600303, quién realizó este trabajo de análisis original de creatividad propia, por lo tanto, su conocimiento público no implica transferencia o sesión alguna de la propiedad intelectual

ANTECEDENTES

PRIMERO.-En el año 1876 fue apegada a derecho la declaratoria de validez del Congreso de la Unión de fecha 26 de octubre de 1876, una que resuelve que por haber obtenido la mayoría de votos en la elección de 9 de julio del mismo año, declara presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos a Don Sebastián Lerdo de Tejada. Lo anterior en razón de que tal declaratoria se ajusta correctamente al artículo 60 de la Constitución de 1857. Por tal motivo fue ilegal el "Plan de Salamanca" y el reemplazo del poder ejecutivo que como presidente interino de la República hiciera el presidente de la Suprema Corte Don José María Iglesias, del 26 de octubre al 28 de noviembre de 1876, hecho que atentó contra el artículo 82 de la Constitución de 1857, puesto que si fuera el caso que Don Sebastián Lerdo de Tejada (presidente electo) presuntamente no podría estar presto a tomar el cargo a la fecha del 1º de diciembre, tal fecha aún no había llegado; además, de conformidad con los artículos 5, 6 y 117 de la Carta Fundamental, entonces presidente de la Suprema Corte José María Iglesias, no estaba autorizado para decidir sobre cuestiones políticas, tampoco podía calificar la legitimidad de la resolución electoral emitida por el poder legislativo, ni invadir la soberanía de los Estados, ocupando las funciones del Poder Ejecutivo, pues con tan flagrante violación al artículo 16 de dicha ley, omitiendo entender la diferencia sustancial entre lo judicial y lo político, e indebidamente se facultado para explorar la legalidad de las autoridades,

SEGUNDO.- En el año 1876 fueron ilegales las rebeliones quirúrgicas del "Plan de Tuxtepec", "Plan de Palo Blanco" que reforma al Tuxtepec, emitidos por el movimiento militar golpista del General Porfirio Díaz, lo mismo que el "Plan de la Noria ", por el que se desconoce al presidente Benito Juárez y se derroca con un golpe de Estado a los poderes constituidos y representados por el presidente electo Don Sebastián Lerdo de Tejada.

TERCERO.-En el año 1910 fue ilegal las rebeliones surgida del "Plan de San Luis" por el que Francisco Madero convoca al uso de la violencia contra el General Díaz, también ilegal fue el "Plan de la Ciudadela" para el asesinato de Madero y gestar otro golpe de Estado, ilegal el "Plan de Guadalupe" por el que da inicio otra rebelión para derrocar a Huerta, ilegal el "Plan de Agua Prieta", para derrocar a Carranza, igualmente ilegal fue

la "declaración de fecha 10 de octubre de 1913 ", Por la que determina la disolución del Congreso de la Unión. Igualmente resultaron contrarios a la ley el "decreto de fecha 2 de febrero de 1916", por el que el Jefe de las fuerzas rebeldes Don Venustiano Carranza cambió la residencia de los poderes federales al teatro Iturbide de la ciudad de Querétaro,

CUATRO.- En el año 1917 fue ilegal el pretendido "Congreso Constituyente de 1917", celebrado en el teatro Iturbide de la ciudad de Querétaro, así como las facultades que los supuestos congresistas tienen, pues cuantos poderes legalmente nunca reconocidos en personas comunes que ostentaban una situación de rebeldes delincuentes insurrectos, sediciosos y amotinados, mismos sobre quienes recaían hasta hoy en día la acusación pública del artículo 128 de la constitución legítima y aún vigente de 1857.

FUNDAMENTOS

I.- El artículo 128 de la Constitución legítima y aún vigente establece el principio de inviolabilidad constitucional donde dice:

“Artículo 128.- Esta Constitución no pierde su fuerza y vigor, aun cuando por alguna rebelión se interrumpa su observancia. En caso de que por un trastorno público se establezca un gobierno contrario a los principios que ella sanciona, tan pronto como el pueblo recobre su libertad, se restablecerá su observancia, y con arreglo a ella ya las leyes que en su virtud se hubieren expedido, así juzgados, así los que hubieren figurado en el gobierno emanado de la rebelión, como los que hubieren cooperado a esta”.

Debido a esta disposición los actos de un golpe de Estado militar o de una revolución armada no engendran efectos jurídicos válidos, es decir, no tienen eficacia, pues un amotinamiento militar no está consagrado como una forma legal para acceder al ejercicio de los poderes públicos, tampoco se puede ni debe romper el derecho para imponer sus propios puntos de vista, engendrados al amparo de su excitación política o de la venganza contra el antiguo tenedor del poder. No puede haber un vacío legal entre el gobierno que antes existe y la instauración del nuevo, pues no está reconocido alguna posible situación intermedia de "derrocamiento", o "preparatoria" para la implantación de un nuevo régimen, además, y como es el caso de que los jueces no calificaban la elección, y al no estar en condición de hacer política,

Las rebeliones militares y las revoluciones civiles solo pueden tener un fundamento moral o histórico, pero nunca jurídico, es decir; el derecho a la conspiración, al amotinamiento militar o la revolución civil no existe. Jamás ha existido un "derecho de rebelión", luego, a la luz de la ley no tienen validez ni eficacia jurídica los planos, acuerdos, decretos, reformas, o determinaciones que los insurrectos han impuesto, ni sus disposiciones tienen el carácter de fuerza obligatoria , debido a que el procedimiento para renovar los poderes públicos estaba previamente reglamentado en

el artículo 81 de la misma Constitución de 1857, que consiste en la celebración de elecciones extraordinarias.

La Jurisprudencia establece que: *“La usurpación de Victoriano Huerta rompió el molde de la Constitución de 1857, aparentemente quedó en suspenso, y sin aplicación en parte, pero no hubo ni hay ley alguna posterior que haya derogado o anulado expresamente, por el contrario, los líderes de la revolución reconocieron su vigencia por lo que existe como ley suprema, por más que la observancia de muchos de sus preceptos queda en suspenso”*.

II.- El intento de reformar la Constitución legítima de 1857 era prácticamente imposible porque, tal procedimiento estaba blindado por las barreras infranqueables del artículo 127 de dicha legislación; si bien podría abarcar una serie de puntos pero nunca el relativo a la titularidad del supremo poder constituyente, es decir, para que una modificación constitucional pueda ser considerada como reforma legal y válida, y no como otro tipo de alteración diverso, era necesariamente también que se rescatara la titularidad del supremo poder originario, aquel poder primitivo consagrado como legítimo que solo corresponde a la titularidad de quienes lo ejercían con el respaldo del sufragio electoral del pueblo.

Es claro que fue ilegal la pretendida “iniciativa de reforma a la Constitución de 1857”, suscrita por el rebelde usurpador revolucionario Don Venustiano Carranza, presentada el 1º de diciembre de 1916; indebida fue también la aprobación de la iniciativa de reforma del 31 de enero de 1917, por la que se pretende reformar la Constitución de 1857; e infundado el Decreto Transitorio de la pretendida Constitución de 1917, por el que se dice que comienza a regir a partir del primero de mayo de ese mismo año; fue ilegal también el decreto revolucionario de convocatoria de fecha 19 de septiembre de 1916, expedido por Carranza Jefe de las fuerzas rebeldes revolucionarias, así como las modificaciones al decreto de 12 de diciembre de 1914 dado por los facciosos en la ciudad de Veracruz,

La facultad de erigirse en constituyentes que tienen que tener los revolucionarios reunidos en Querétaro en 1917 no fue tal, pues según el experto en derecho como el maestro Luis Recasens Siches, dice: *“..... no toda sustitución en el poder o reforma a la constitución representa una producción original del derecho, ni por tanto inaugurar un nuevo sistema jurídico, ni tampoco una determinación de solución de continuidad respecto del orden anterior. Una constitución puede ser modificada o sustituida normalmente y legalmente, es decir, siguiendo para ello el procedimiento de reforma prevenido de modo explícito o tácito en la constitución anterior, esto es, en la que se modifica o reemplaza; y entonces en modo se rompe la continuidad de la vida jurídica estatal, puesto que al cimiento anterior constitucional se superpone otro nuevo engarzado con él, fundado en él; de suerte que la validez de la nueva constitución no representa algo primitivo, no es algo radicalmente original, no es algo de nueva planta, sino que se deriva de la validez de la constitución precedente, la cual sirve de fundamento a la nueva. Al no haber cuantos elementos de legitimidad, lo hecho en cuanto a las reformas pretendidas a la constitución de 1857, no fue tal, pues negado el*

fundamento de su competencia legal, un nuevo sistema jurídico, sin conexión con el anterior; lo que representaría una ruptura total del orden jurídico precedente, aún en el caso de los cuantos cambios se hubiesen sucedido en forma pacífica”.

No puede haber ninguna incertidumbre sobre quién debe ser el titular del "poder constituyente originario", pues nos queda claro qué intrusos rebeldes revolucionarios como Díaz, Madero, Huerta, Carranza, Calles, Obregón y los que se han sucedido hasta la fecha en el gobierno, no podría ni puede fundar su competencia y su legitimidad en la Constitución de 1857, quedando vedados del derecho a la titularidad de ostentación como "poder constituyente originario", así, perdida la continuidad que era lo esencial en el anterior, y en el caso que nos ocupa, resultado hartos, claro y notorio que el órgano o poder "constituyente" que supuestamente reformó la Constitución de 1857, no estaba autorizado como legítimo según dicha Carta, en virtud de que no hay confesión de competencia para ello por no tener la titularidad del poder o de los poderes constituidos, que solo confiere el pueblo por la vía de los procesos de elección, previamente regulados por ella misma y no por la vía de la imposición en el mando, al amparo de la fuerza de las armas y de la violencia expresamente prohibida por la ley, además, los 218 impostores del pretendido congreso constituyente de Querétaro, no estaban en posibilidad legal de representar a nadie, en razón de que el derecho para alterar y modificar la forma de gobierno a que se refiera al artículo 39 constitucional, es "inalienable", por consecuencia, intransferible, y no podría pasar válidamente al dominio de un tercero llamado "representante", intermediario o mandatario, pues tal prerrogativa no puede apartarse, separarse o alejarse de cada uno de sus titulares que son cada individuo mexicano, es decir, la facultad para alterar o modificar la forma de gobierno es tan personal que no admite de apoderados o intermediarios.

Al haber una acusación pública proveniente de una ley suprema en el artículo 128 de la Constitución de 1857, es obvio que los derechos políticos electorales de Don Venustiano Carranza estaban afectados, y en su calidad de presunto delincuente – lógicamente- no tienen derecho a tener sus derechos políticos a salvo para postularse como candidato, lo cual le originaba como consecuencia impedimento legal para ser electo según el artículo 77 de la Constitución legítima de 1857. El jefe de los rebeldes Don Venustiano Carranza junto con su camarilla de delincuentes auto-denominados "constitucionalistas", lo que se traduce en “defensores de la Constitución de 1857”, resultó ser anti-constitucionalistas, abolicionistas, absolutistas, contras y radicalistas de dicha Carta Fundamental, pues tan miserable ejército no tenía, sin embargo, la convicción doctrinaria de defensor la Constitución, sino más bien la aniquilarla para imponer el rigor de su código particular de 1917.

III.- Sobre *¿qué es el castigo para los delitos políticos?* la jurisprudencia establece lo siguiente: *“Los artículos 6, 7, 9 y 39 constitucionales consagran con el rango de garantías individuales la libre manifestación de ideas, la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia, el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito y el derecho inalienable que tiene el pueblo de alterar o modificar la forma de su gobierno; sin embargo estas garantías, no pueden ni tener que*

entenderse sino dentro del marco de la legalidad, o mas que pueden organizarse grupos políticos de las más diversas ideologías siempre y cuando su actuación la realicen dentro de las normas fijadas por el sistema jurídico que nos rige, sin usar la violencia ni atentarse contra el orden establecido,. Fuente: Séptima Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación. Tomo: 48 Segunda Parte. Página: 49.

Entre la Constitución de 1857 y la de Querétaro de 1917 no existe ningún lazo de unión, pues ninguno de los preceptos de esa mandan que se acepte los de aquella; esto, establece un orden de cosas completamente nuevo”.

No existe en el derecho positivo nacional o internacional, ni ha existido nunca, facultad legal para legitimar un golpe de estado o una revolución, pues en las leyes mexicanas han estado previstos siempre, los medios legales específicos para cambiar el régimen político de gobierno.

Expertos en derecho determinados que jurídicamente el derecho a un golpe de Estado o una revolución no existe, porque no existen contenidos dentro de la filosofía del derecho, esto significa que ninguna ley de ningún país jamás han reconocido el derecho a la rebelión o al amotinamiento, porque en sus reglas jurídicas constitucionales existen los medios idóneos que ofrecen la posibilidad legal de una reforma del orden político. Una revolución que está asociada con un desorden público, no está permitida en las leyes de una sociedad civilizada.

Es ilegal la “Constitución de 1917” desde el triple punto de vista jurídico, político y revolucionario. El mecanismo legal para haber reformado la Constitución de 1857 se estableció previamente en el artículo 127 de esta última.

La pretendida Constitución de 1917, no fue hecha por el pueblo de México ni para el pueblo mexicano, esto es así de conformidad con la jurisprudencia de la Corte que determina que no tiene validez la existencia de dos constituciones en una misma época, y que no existe ley válida que haya sido derogado, abolido, anulado o suprimido a la Constitución de 1857, solo se le quiso sepultar pero, el texto de la supuesta constitución de 1917 no se desprende alguna referencia en ese sentido. La supuesta Constitución de 1917 jurídicamente no existe, y no pudo surgir como una nueva que sustituyera a la de 1857, por la nueva no lo dice así, ni tampoco se señala en ella que la anterior quedase derogada.

La jurisprudencia mantenida que: *"No pueden existir dos constituciones en vigor y observancia en la misma época".*

La Constitución de 1917 fue un aborto espontáneo de la sub-clase social minoritaria convertida en combatientes, y en sus obras se resienten las pasiones, los odios y los rencores de esa casta neo-militar sangrienta. La Constitución de 1917 es un documento inválido que en nada altera los textos originales de la Constitución legítima de 1857 que aún sigue vigente.

La sumisión tácita o expresa del pueblo a la falsa constitución de 1917, así como su invocación para defender algunos de sus derechos civiles ante cualquier atropello, no acarrear ningún beneficio de legitimidad a los gobiernos emanados de la revolución, por el contrario, tal comportamiento, ubicar a sus seguidores y colaboradores en diversas situaciones delictivas tipificadas en el Código Penal.

Cabe señalar que habrá quien sea sostenga de la tesis doctrinal del "*hecho delictivo consumado*" como base de la validez y de los efectos jurídicos en los actos de la revolución, pero tal postulado, no puede tener la eficacia pretendida cuando se sucedió la toma del poder alterando el orden público (por la fuerza), con menoscabo de la ley, es decir, no se pueden anteponer los hechos delictivos a las disposiciones del orden público como sustento de legitimidad, y menos aun cuando se busca la transformación de un régimen político de gobierno, pues el derecho positivo mexicano no garantiza tal posibilidad, siendo claro que el uso de las armas y la violencia no se encuentra contenido en el artículo 39 constitucional como facultad para alterar o modificar la forma de gobierno.

IV.- Las rebeliones y las usurpaciones del poder ocurridas por los amotinamientos militares y rebeliones civiles desde luego son delitos de carácter permanente.

Un delito "permanente" según la ley vigente, es aquel cuya acción delictiva permite, por sus características, que se le puede prolongar voluntariamente en el tiempo de modo que sea idénticamente violatorio del derecho en cada uno de sus momentos.

En efecto, en los delitos permanentes todos y cada uno de sus momentos son de comisión; circunstancia que, por éxitos, involucramientos permanentemente en su ejecución a quienes enterados de la acción, admitidos o quienes por pre-ordenación la realizada y, por tanto, deben responder penalmente como coautores; todo lo cual justifica respecto a la flagrancia y la inmediata orden de detención, sin que sea menester para proceder a la detención del infractor, según el artículo 16 constitucional, tener orden de aprehensión alguna ni escuchar previamente en juicio al acusado para realizarla, y el dicho de los aprehensores, debe tomarse como una prueba testimonial.

Cuando los militares golpistas y los rebeldes revolucionarios alcanzan su propósito y el delito de rebelión se consumó, el pueblo de México se encuentra desde entonces sufriendo un momento el momento público desorden y la privación de su libertad, y en esa privación los civiles hemos tenido también de momento a momento las restricciones y el menoscabo de nuestro honor, de nuestra economía, etc., de tal suerte que, por él mismo, delitos permanentes o de efectos permanentes que siguen vigentes. Al respecto la Jurisprudencia dispone que: "La persecución de los delitos permanentes no prescribe, en tanto no se acabe el estado antijurídico creado por ellos: En lo que concierne al comienzo de la prescripción, es determinante al momento de la acción, entendida actualmente con arreglo a la teoría del resultado. En los delitos continuados comienza la prescripción en el último acto. En delitos permanentes, cuando acaba el estado antijurídico".

La ley no señala un número mínimo o máximo de rebeldes militares o revolucionarios civiles, ya sea que se les denomina delitos contra el Estado, contra la seguridad nacional, contra el orden público, contra el orden constitucional, a la conspiración, la rebelión, el motín, y la sedición, etcétera; se les considera como delitos políticos en razón de que por cuantos delitos altera, con toda evidencia, el bien jurídico protegidos que es el "orden público", y la garantía de la "seguridad jurídica" en su expresión más alta, de lo cual depende, sin lugar a duda, el respeto guardado a los órganos creados constitucionalmente para hacer realidad los fines de la ley, dentro de un régimen de derecho, dicho orden implicado, el cumplimiento de la ley, en sus diversas jerarquías,

V.- En materia de derecho internacional que fundamenta el principio de inviolabilidad constitucional se consagra en la llamada DOCTRINA TOBAR, la del doctor Carlos Tobar, conocida como: *"Teoría de la Legitimidad Constitucional en Materia de Reconocimiento", que actúa en defensa de la legitimidad democrática establece que: "las repúblicas americanas por su buen nombre y crédito, aparte de otras consideraciones humanitarias y altruistas, deben intervenir de modo indirecto en las últimas intestinas de las repúblicas del continente. Esta intervención podría consistir, al menos, en el no reconocimiento de los gobiernos de hecho quirúrgicos de las revoluciones contra la Constitución"*.

La Doctrina Tobar se encuentra reconocida en el tratado que lleva por nombre: "CONVENCIÓN AL TRATADO GENERAL DE PAZ Y AMISTAD" firmado el 20 de diciembre de 1907, y en ella los gobiernos de los Estados centroamericanos firmaron dicho tratado por el que se obligaron a no reconocer un gobierno que en cualquiera de las cinco repúblicas pudiese llegar al poder como consecuencia de un golpe de Estado, o de una revolución contra el gobierno reconocido, en tanto los representantes elegidos libremente por el pueblo no hubieran reorganizado constitucionalmente al país.

Así es como se concluye que son gobiernos contrarios a la constitución legítima de 1857 todos aquellos quirúrgicos desde 1876 hasta la fecha.

R E S U M E N

PRIMERO: DE LA ESCLAVITUD DEL PUEBLO MEXICANO SUBORDINADO A LOS REBELDES REVOLUCIONARIOS.

En teoría el pueblo mexicano en su calidad de grupos de individuos libres no puede ser esclavo o prisioneros frente a quienes ejercen los poderes del Estado, pero, en los hechos fue creada una condición de intrusos gobernantes que se auto-constituyeron amos de los gobernados. Desde hace mucho tiempo, la sociedad civil del pueblo mexicano (los gobernados) no goza de la garantía de plena libertad constitucional, ni de la protección de sus legítimas leyes, viven en condición de prisioneros de los secuestradores militares golpistas y revolucionarios que se amotinaron y tomaron por la fuerza de las armas los poderes del Estado, aberrantes usurpaciones que no están respaldadas por el derecho positivo; vulgares delincuentes que se hacen pasar por gobernantes, cuando en verdad son meros intrusos que mantienen sometidos, bajo su

dependencia y dominio absoluto a los ciudadanos mexicanos y a sus bienes patrimoniales tanto privados como públicos.

El artículo 2º de la Constitución de 1857 cita:

“Artículo 2º.- En la República todos nacen libres. Los esclavos que pisen el territorio nacional, recobran, por ese solo hecho, su libertad, y tienen derecho a la protección de las leyes”.

SEGUNDO: DE LA AUTORIDAD SUPREMA Y SOBERANA DEL PUEBLO MEXICANO.

El artículo 39 constitucional establece en ambas cartas constitucionales en forma similar en número y texto lo siguiente:

“Artículo 39.- La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo, y se instituye para su beneficio. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”.

De lo anterior se infiere que la soberanía (autoridad) reside esencial y originariamente en el pueblo (sociedad civil) y que todo poder dimana de él y se instituye para beneficio de éste. De igual forma, en teoría el artículo 41 constitucional establece que el pueblo (sociedad civil) ejerce esa su soberanía (autoridad) por medio de los Poderes de la Unión, y en razón de un mecanismo del régimen del sistema de representatividad dispuesto en el artículo 40 del mismo ordenamiento, no todos los miembros de la sociedad civil pueden encargarse de las tareas de gobierno, esa responsabilidad se deposita según el artículo 41 antes referido, en personas integrantes de las sociedades políticas conocidas como partidos políticos, integrados por individuos que se distinguen por ser expertos en el arte de las tareas del Estado.

Por la legislación vigente entendemos que un pueblo “soberano” está en posesión de una omnipotencia social: Todos los derechos son suyos; de lo contrario no sería omnipotente; y no siendo omnipotente no sería soberano. Por la misma razón todas las obligaciones están fuera de él; porque si el tuviera alguna obligación que cumplir, sería súbdito: soberano es el que manda, súbdito el que obedece; soberano es el que tiene derechos, súbdito el que tiene obligaciones. Así el principio de la soberanía popular, que es un principio ateo, es también un principio tiránico, por que dónde hay un súbdito y no tiene derechos, y un soberano que no tiene obligaciones, hay tiranía. Esto obliga a entender la realidad respecto de la soberanía del pueblo frente a sus representantes en el gobierno.

Soberanía del pueblo es una palabra vacía. *¿Qué idea tiene el pueblo de su soberanía?, ¿es la de la fuente de autoridad?, ¿y cómo la comunica?, ¿y qué se reserva? y ¿cómo se contiene en todo él?, ¿y con qué derecho podía residir en alguna de sus partes?, ¿cómo redimirle de los inconvenientes inevitables de su*

naturaleza? luego, con esto el individuo es esencialmente fuerte, poderoso, libre, uno: luego, en su voluntad expiran todos los inconvenientes de hecho, y en su razón todos los de derecho: luego, ¿es intransmisible o es perecedera?; porque si se transmite, ¿qué le queda al pueblo?. Si no se transmite, entonces el gobierno es una usurpación, o es una ironía. ¿Le viene de otra parte?, ¿pero de dónde?, ¿ésta es divisible?, ¿cuál es su razón numérica respecto de cada persona?, ¿cuál es su valor apreciativo en cada nación?, ¿cuál es su valor efectivo en cada individuo?, por ejemplo: Cuando en una batalla perecen veinte mil, ¿cómo queda la soberanía?, ¿sus modificaciones siguen la razón de los nacidos y muertos en el censo de población?, ¿dónde queda la soberanía si ganan los intrusos?.

El artículo 31 fracción I de la Constitución legítima de 1857 dice:

Artículo 31.- Es obligación de todo mexicano: Fracción I: Defender la independencia, el territorio, el honor, los derechos e intereses de su patria.

TERCERO: DE LA SUPREMACÍA DE LA LEY Y DEL PRINCIPIO DE LA INVOLABILIDAD CONSTITUCIONAL.

El artículo 128 de la Constitución de 1857 se establecen las prevenciones necesarias en caso de su hipotética violación, supone los motivos de un trastorno público, una rebelión y el establecimiento de gobiernos contrarios a sus principios sea motivo para interrumpir su vigencia, que tan luego como el pueblo recobre su libertad se restablecerá su observancia, y con arreglo a ella y a las leyes que en su virtud se hubieren expedido, serán juzgados, así los que hubieren figurado en el gobierno emanado de la rebelión, como los que hubieren cooperado con ésta.

Según los expertos en derecho, jurídicamente el derecho a una revolución, a una contrarrevolución o a un golpe de Estado no existe, pues éstas no están contenidas dentro de la filosofía del derecho, ninguna ley, de ningún país, reconoce el derecho a la rebelión o al amotinamiento como forma legítima para tomar los poderes del Estado, o para cambiar un régimen político de gobierno, porque en las reglas jurídicas constitucionales existen previamente establecidos los medios idóneos adecuados que ofrecen la posibilidad legal de reformar el orden político.

Se lee textualmente en el artículo 9º constitucional que una rebelión, la que necesariamente está asociada con la idea de un desorden público, no está permitida en una sociedad civilizada pues ni sus integrantes tienen derecho a deliberar en una reunión armada, y por su parte el artículo 17 de la Carta Marga o ley suprema, cita:

“Nadie puede ejercer violencia para reclamar su derecho”.

Sobre la punibilidad de los delitos políticos la Jurisprudencia dice lo siguiente:

“El derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito y el de alterar o modificar la forma de su gobierno; (artículos 9o y 39 Constitucionales) no

pueden ni deben entenderse sino dentro del marco de la legalidad, o sea que pueden organizarse grupos de las más diversas ideologías siempre y cuando su actuación la realicen dentro de las normas fijadas por el sistema jurídico que nos rige, sin emplear la violencia ni atentar contra el orden establecido, porque en el momento en que los integrantes de un grupo al amparo de esas garantías actúan en contravención a los principios de la Constitución, se hacen acreedores a las sanciones que corresponden a la ilicitud de su conducta, entonces, la finalidad de esa conducta tendrá que encuadrarse forzosa y necesariamente dentro de la legalidad, o sea la obtención del poder a través del proceso que señalan las leyes". Fuente: Séptima Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación. Tomo: 48 Segunda Parte. Página: 49.

Resta decir que el artículo 126 de la Constitución legítima y aún vigente de 1857 ha sido letra muerta para los poderes que ejercen los diversos Estados integrantes de la Federación.

CUARTO: DEL SISTEMA DE PARTIDOS.

La vida democrática del país no está exenta de prácticas negativas de interés de los individuos que dirigen los partidos, "los políticos", su actuación es divergente y generalmente tienden a buscar perpetuarse en el poder para vivir pendientes de los cargos públicos, de la "polis" (*la política*) que es su principal negocio y su empresa son las asociaciones llamadas "*partidos políticos*", mismos que en teoría, deben ser financiados con dinero de sus asociados, pero, prefieren las prerrogativas económicas del presupuesto público, y otros financiamientos de origen vergonzoso, procurándose ventajas ilegales y deshonestas en las contiendas electorales y en el ejercicio del poder.

Andrés Serra Rojas en su libro "Origen del Estado", dice:

"Una sociedad está gobernada por dos corrientes diferentes: Las fuerzas del espíritu contenidas en sus tradiciones, en la naturaleza espiritual del hombre que cultiva valores y principios; mas hay otras fuerzas negativas que operan sobre la sociedad deformándola, se originan en los egoísmos, pasiones, instintos e intereses de los hombres."

Por su parte Carlos Ruiz Alegría en su obra "Teoría Política" dice:

"Los partidos presentan serias imperfecciones, fenómenos graves y desordenes sociológicos que les limitan el cumplimiento de las funciones que justifican su existencia".

Investigaciones en ciencias políticas concluyen que, la utilidad de los partidos no hay que definirla en función a su declaración de principios o programas de acción, ni en razón de su filosofía o clase social de afinidad ideológica a la que pertenezcan, sino en atención de lo que hacen diariamente para conquistar el poder o por conservarlo, dependiendo del cabal cumplimiento de sus facultades.

Octavio Rodríguez Araujo dice: La misión de un partido para conquistar el poder consiste en lo siguiente:

_ Organizar al electorado; _ Servir de puente entre la sociedad y el gobierno; _ Fortalecer una estructura organizacional más eficiente; _ Formular programas políticos de calidad; _ Representar efectivamente los intereses de sus afiliados; _ Lograr más aceptación entre la ciudadanía; _ Defender su ideología política; _ Seleccionar y capacitar líderes para elevarlos a la aceptación de la ciudadanía; _ Formular estrategias que permitan una mayor exposición de sus objetivos y logros; _ Demostrar con hechos su intención de tomar el poder; _ Formar organismos que orienten a la opinión pública; _ Formular programas de actividad política que tiendan al mejoramiento de la colectividad; y, _ Mantener un control real del gobierno.

Normalmente todo lo anterior no se considera indispensable y no se pone en práctica, la comodidad en la que viven no se los exige, nadie los obliga, además, para hacer eso no cuentan con presupuesto público y para colmo, sus socios no cooperan, su aparición ocurre solo en temporadas de elección, en donde como arma política para cautivar al elector, solo hacen gala de su capacidad para descalificar a sus adversarios.

Robert Michels, en su libro: “Los Partidos Políticos”, dice: La ley de hierro de la oligarquía consiste, en:

“Las ambiciones personales o de grupo de los dirigentes de los partidos, (los políticos) que crean una clase políticamente diferenciada y subdividida muy distante de la gente común que forman las bases de sus afiliados, esos dirigentes, hacen un proceso de selección interna cerrado, lo que supone un conflicto forzoso de intereses de la mayoría sus asociados, a los que solo utilizan como un mero instrumento de utilidad para el día de las votaciones”.

Las asociaciones políticas llamadas “partidos” eligen, registran y promueven a su gusto a las personas que habrán de gobernar, en cambio, para la gran mayoría de la gente común del pueblo, (los ciudadanos libres de partidos) su espacio es reducido, ellos no intervienen en eso, su opinión no cuenta, tienen un lugar secundario, su intervención ocurre hasta el día de las votaciones, su decisión es impersonal, es decir, los electores no votan por la persona sino por alguno de los símbolos distintivos de los partidos, mismos que aparecen impreso en los recuadros de las boletas electorales.

Gonzalo Fernández de la Mora, en su libro titulado “La Partidocracia” dice:

“Analizando históricamente la evolución, desarrollo y fortalecimiento de los partidos, se ha comprobado que éstos, se han colocado en un lugar preeminente (superior) con relación a la toma de decisiones en el ejercicio del poder, al grado de que, el centro verdadero del poder del estado, se ha degenerado peligrosamente desplazándose hacia la voluntad de los partidos”.

El desplazamiento del poder institucional del estado hacia los partidos es:

“La democracia degenerada en el poder oligárquico (el gobierno de unos pocos) de uno o más partidos políticos”.

El Estado “Partidocratico”, es aquél en el que el poder resulta monopolizado, más o menos legítimamente por un partido o por una pluralidad de partidos aliados, lo que da lugar a que éstos, no lo substituyan, ni coadyuvan con él en el ejercicio del poder, sino que, al disputárselo lo invalidan y lo descuartizan en las dos formas siguientes:

La substitución de los partidos en el papel del Estado derivado de la Partidocracia: Sus características son:

_ La pérdida de independencia de los representantes populares; _ El sacrificio de la capacidad de los representantes en busca de una mayor disciplina de partido; _ La transferencia de la voluntad popular a la voluntad partidista; _ La deshumanización de los representantes de elección que se convierten un mero instrumento de votación para los partidos; _ La devaluación política de la asamblea legislativa; _ El desarrollo del proceso real de legislación y de acuerdos parlamentarios fuera de los recintos para ese efecto; _ La falta de control real sobre el gobierno; _ La confusión de los poderes del estado; _ La pérdida de funciones reales de las cámaras de representantes; _ El deterioro de la vida política local por la imposición de criterios partidistas; _ La monopolización de la actividad política que impide la creación y competitividad equilibrada de los partidos en el ejercicio del poder; y, _ La consolidación monopólica de una administración que impide un pluralismo efectivo.

De la desintegración del Estado derivada de la Partidocracia: Sus características son:

_ Un pluralismo caro y desquiciante, en donde no se logra una coalición mayoritaria, solo un proceso legislativo fragmentado y caótico; _ La paralización de la acción de gobierno; _ Un vacío de poder; y, _ La carencia de un proyecto definido de gobierno.

Es contra el derecho natural, la moral, el orden público que los representantes populares mantienen su relación de sociedad y de fidelidad o lealtad para con sus partidos, éstas (*las relaciones*) no desaparecen, la voluntad de los funcionarios públicos ya electos sigue sometida al dictado de los dirigentes de su partido, manteniéndose un control sobre las decisiones de los servidores del Estado.

Los partidos políticos no son órganos del estado, y tan es así que se retoma el sentido de la sentencia número 10/1983 del Tribunal Constitucional español de fecha 21 de febrero de 1983, por la que se resuelve que:

“Se impide a los partidos invadir la autonomía propia de los representantes del pueblo en los órganos parlamentarios, sin importar que hayan sido sus promotores, pues la investidura popular recae sobre los candidatos, no sobre los partidos que los presentan y éstos no pueden privar o sustituir a los electores de su mandato”.

Los partidos y sus candidatos mantienen una relación de divorcio con la mayoría de la población. Se trata de una crisis de participación que origina una crisis de legitimidad que nos arroja como resultado representaciones populares electas por minorías.

Jorge Vera Estañol, en su libro, “Al margen de la Constitución de 1917”; dice:

“Cuando la opinión pública no se manifiesta en los comicios; más que esto, deja de hacer oír su voz en todos los momentos con relación a todos los actos importantes de la administración, la comunidad de ideas entre el pueblo y sus representantes insensiblemente va desvaneciéndose, las fuerzas que mantienen los lazos de dependencia y responsabilidad, se relajan paulatinamente; y si el silencio se prolonga el gobierno acaba por sentirse independiente, irresponsable, infalible, omnipotente. La democracia resulta entonces una quimera; (un sueño, una ilusión) la autocracia (tiranía-dictadura) vestida con falsos ropajes, en la realidad: El gobierno es amo y no servidor; hace los comicios, en vez de que los comicios hagan el gobierno”.

Para calificar el esfuerzo de los partidos más pequeños, resulta un fenómeno al que se le ha dado en llamar “*votación inútil*” o elección inútil. Lo votación diferenciada pone de manifiesto la división de la sociedad civil que se deja seducir por tal o cual partido. El interés de los partidos pequeños es artificial pues su única labor consiste en trabajar hasta donde pueden lograr sostener el nivel de votación requerido por la ley, que les alcance para conservar su registro y los beneficios del presupuesto público.

Por otra parte, es falsa la lealtad a los principios o doctrinas y estatutos de su instituto político pues, los dirigentes militantes afiliados o simpatizantes a los diversos partidos generalmente cuando las condiciones se lo permiten, prefieren cambiarse a otro y votar por uno diferente al suyo sin ningún recato ético, demostrando su falta de identidad ideológica.

Es contra el orden público que, las representaciones que resultan de los diversos partidos, al ejercer el gobierno en las distintas jurisdicciones y jerarquías, incumplen su deber de corresponsabilidad es decir, no cooperan entre sí, por el contrario, difieren con los demás de otros partidos y tienden a enfrentarse con mayor rigor a como lo hicieron antes en las campañas electorales, no se les olvida que fueron y siguen siendo adversarios de ideas y, generalmente utilizan de su autoridad para fracturarse y entorpecer sus respectivas atribuciones.

No obstante los mandamientos de la constitución y de las leyes que de ella emanan, los representantes populares paulatinamente han desatendido brindarle bienestar a las clases populares; mantienen oídos sordos y por acción u omisión, se han venido apartando de procurarle calidad y eficacia al cumplimiento de sus respectivas facultades.

Durante años en los tres Poderes del Estado mexicano, se han venido sucediendo acciones y omisiones de los servidores públicos de primer nivel, aquellos que son designados por elección a través de los partidos políticos, generalmente faltan al

cumplimiento de la sus obligación por salvaguardar los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia del servicio.

Se ha comprobado que no han sido eficaces las instituciones y procedimientos encargados de aplicar el sistema de medios de control, aquel que fue creado para contener el irregular comportamiento de los servidores públicos; las instancias, las leyes, el juicio político, el de responsabilidades, el de desafuero, el de amparo, el juicio administrativo, civil o el penal; ellos los políticos, son asociados (*socios de interés*) de tal manera que, los medios de control legal están al mando de la misma membresía, (*hermandad*) de otros asociados y así todos confabulados, tienen asegurada la dispensa (*impunidad*) de sus infracciones.

Para controlar la magnitud del irregular comportamiento de los servidores públicos, presuntamente los responsables de estas instancias, al saber que se trata de un compañero burócrata tienden a buscar favorecerlo procurando a su favor las formas que le permitan el desequilibrio a esos procedimientos para que resulte bien librado, es decir, se configura la presunción de probable asociación delictuosa colectiva. La corrupción y la impunidad proveniente de los servidores del Estado cometida por acciones u omisiones se debe al inexplicable descuido derivado del paulatino relajamiento de los superiores jerárquicos encargados de supervisar el cumplimiento de facultades de los subordinados y su complicidad en al omitir su obligación (deber) de denunciar y castigar severamente y de manera ejemplar tales conductas indebidas, lo que supone la hipótesis de delincuencia organizada. Haber dejado de fomentar los principios la honradez, la lealtad, la eficiencia en el servicio como principios rectores de la función pública, ha propiciado un ambiente de corrupción, autoritarismo, desvío de poder, ultrajes a las instituciones y formas de gobierno, lo que necesariamente acarrea la responsabilidad.

La resistencia a someterse a la observancia del carácter obligatorio de la ley, afecta al interés público y acarrea perjuicios a los derechos de terceros, su rebeldía, está en desacuerdo con el espíritu que contienen los artículos 6º y 8º del código civil federal que dicen:

“La voluntad de los particulares no puede eximir de la observancia de la ley ni alterarla o modificarla. Solo pueden renunciarse los derechos privados que no afecten directamente el interés público, cuando la renuncia no perjudique derechos de terceros”. “Los actos ejecutados contra el tenor de las leyes de orden público o de interés social serán nulos, excepto los casos en que la ley ordene lo contrario”.

El deber de desempeñarse en un cargo público, es un deseo de la colectividad y debe apreciarse como un bien para la satisfacción de todos. Ante tal posición, el derecho tiene la obligación de emitir una norma protectora de dicho bien, de esa manera el interés público toma relevancia de superioridad jurídica.

Rafael I. Martínez en su obra “Diccionario Jurídico” dice:

“Por la importancia de lo que se menciona, el interés público es una limitante de la libertad individual, a efecto de que no se cause un perjuicio a la colectividad, de ahí que, es necesario el carácter obligatorio de la función pública para la realización de un fin común. La voluntad del representante de elección queda sometida al cumplimiento del interés general, y no puede estar en pugna el interés particular del servidor público, con el de la colectividad. El desvío o exceso del poder de la autoridad, no puede invocar razones de interés público; por tanto, si no se satisfacen éstos requisitos habrá la posibilidad de obtener la ineficiencia”.

El deseo social consiste en el logro de determinados beneficios comunes o la realización de ciertas acciones tendientes a la consecución de un bien para la humanidad, en cambio, el incumplimiento de facultades de los servidores público conlleva perjuicio (perfidia, traición, mentira, falsedad) al juramento exigido en la Constitución Federal. Dicho juramento tiene un valor esencial, pues según el diccionario aquel que rinde la protesta, está poniendo de testigo a Dios y a los presentes de que su honor y su palabra son la prenda que da de que habrá de cumplir su encomienda.

Gracias a los conflictos el ser humano inventa, evoluciona, se transforma y no se estanca, sus instintos la llevan a averiguar la verdad de sus problemas y buscar los cambios necesarios para su bienestar. Es verdad que el hombre puede adaptarse a un mundo en constante cambio. Cada región del país transita por sus propios tiempos políticos sociales y culturales muy diferentes, y sus habitantes están facultados para decidir cuándo, cómo y en qué sentido impulsar cualquier transformación. Estamos en el tiempo en que es muy fácil advertir la necesidad de darle sanidad al ejercicio del poder, a efecto de re-orientarlo hacia postulados que cumplan con los verdaderos objetivos del Estado, emancipándolo de todo aquello que provenga de los factores del poder o de poderes fácticos y de sus fuerzas negativas.

Johnson Spencer citado dice:

“Es más seguro seguir buscando en el laberinto la salida que permanecer inmóviles, aferrados a las mismas ideas, creencias o costumbres, si es que estas ya no nos conducen a nada bueno, y el instinto nos da la señal de que algo apesta porque esta añejo o no funciona, debe ser desechado”.

Máx. Weber, en su libro “Economía y Sociedad” dice:

“Los partidos políticos son sólo un medio para hacer efectivo el principio democrático, no son la única vía para ello, ni pueden sustituir la intervención directa de la ciudadanía en el ejercicio de sus derechos políticos.”.

Fernando Savater, en su libro “Política para Amador” dice:

“Las sociedades humanas en cualquier lugar del mundo, tienen sus propias razones para mantener obediencia o para estar en desacuerdo con un régimen determinado.

Supone un sentimiento colectivo que propugna por superar la crisis que se le presente. Y, con el objeto de evitar que se forme en torno al estado, una costra de inamovibles especialistas en mandar, bajo la cual todos los demás tengamos que ser resignados especialistas en obedecer, se puede relativizar (subordinar) el papel de los partidos, quitándoles privilegios e importancia.”

Vázquez de Mella hace notar que:

“Cuando un partido logra llevar al poder a sus miembros se transforma a la larga, en partido único dominante, debe controlarse esa situación”.

Francisco Porrúa Pérez, en su libro “Teoría del Estado” dice:

“Es lógico que cuando con el pretexto de formar un partido político se constituya una asociación que sea contraria a los principios democráticos, que sea contraria en consecuencia, al bienestar general, debe ser prohibida, debe prohibirse la asociación delictuosa, contraria a la moral, al derecho natural, o al orden público. ¿Cómo habría el estado de tolerar y amparar una libertad que en la práctica tendiese a destruir los valores mismos que están bajo su custodia?”

QUINTO: DEL SISTEMA DE LA DEMOCRACIA TRADICIONAL.

Por lo que toca al sistema de la democracia tradicional hemos podido comprobar que no está funcionando, esto es porque los procesos electorales están corrompidos al no cumplirse con la fórmula matemática de la voluntad de la mayoría que consiste en obtener en sufragios la mitad más uno del total de electores inscritos, en contrario tenemos que por disposición de la constitución de los rebeldes, estamos utilizando una democracia compuesta a modo llamada mañosamente de mayoría relativa y representación proporcional, que no es por nada la establecida en la ley que exige el 50 % mas 1 de voluntades para un solo candidato.

Se propone el cambio de régimen de gobierno por otro llamado DEMARQUIA.

CONCLUSIONES

- 1.- Las desgracias y los desórdenes de la vida política del país son de interés público: (Nos incumben a todos).
- 2.- Las elecciones públicas y las candidaturas son formas legales que existen para cambiar la forma de un régimen de gobierno
- 3.- Si es que el pueblo mexicano distribuyó temporalmente todos los poderes, *¿podrá este mismo pueblo recuperar todo lo que dio?*, y como es el caso que los “representantes del pueblo” se hicieron dueños de todo, aún del pueblo mismo; además cuentan estratégicamente con el apoyo de las fuerzas armadas, de los jueces y magistrados, de la hacienda pública, y de los recursos naturales del patrimonio

nacional, lo que les asegura el desarrollo de una brutal influencia sobre el conjunto de la sociedad civil.

4.- El todo poderoso y soberano nacional llamado “*pueblo mexicano*”, fue despojado de sus derechos, sus antiguos tronos derribados, hechas pedazos todas sus antiguas constituciones, destruidas todas las grandes riquezas nacionales y arruinados todos sus “poderes”, en fin, inutilizado. De este modo, en nombre del pueblo soberano, los “*sirvientes intrusos*” (los gobernantes surgidos de los golpes de estado y de las revoluciones) se hicieron absolutamente señores de todo, aún de los pueblos mismos.

4.- No se le puede pedir a ningún tribunal nacional o internacional que cambie la forma de nuestro gobierno; que declare que no debe regir la Constitución bastarda de 1917, que resuelva que dejen de desempeñarse como tal los funcionarios impostores; eso es pedir un imposible porque no está previsto en la esfera de la ley, ésta no lo tiene facultado o conferido a ninguno de los poderes del Estado, eso corresponde a la exclusiva competencia de la sociedad civil, (del pueblo), en virtud de su inalienable prerrogativa contenida en el artículo 39 constitucional; pretender que las instituciones de los impostores rectifiquen los hechos delictivos consumados, es pedir un imposible, la sola petición negaría la independencia y la autoridad suprema del pueblo mexicano; tampoco se pretende hacer justicia por propia mano, se trata de ejercer el legítimo derecho a la libertad, a la soberanía y al orden constitucional de la República.

5.- Muchos años bajo esclavitud de los extranjeros Españoles, otros más de esclavitud militar de una dictadura, seguidos de más esclavitud ejercida por los rebeldes de 1910 que se hicieron llamar “revolucionarios”, y los más recientes ejercidos por los farsantes cómplices y dueños de los partidos; no obstante, pese a todas estas adversidades, nuestro pueblo ha sobrevivido, sigue aquí, los políticos han sido transitorios, muchos de ellos ya no están porque ya no tienen cargo ni salario del gobierno, vulgares interesados en el dinero, viles negociantes y traficantes, jugadores del tablero de ajedrez y no piezas del mismo, en cambio, el pueblo sigue aquí porque tiene admirables cualidades, suficiente resistencia y adaptabilidad al difícil medio que se le presenta.

6.- Las fuerzas de este pueblo son tan formidables, poderosas e indestructibles, pero hay algo que es “la fuerza del pasado” que se resiste a morir porque en él se cometieron grandes atrocidades, el pasado lucha en forma lenta y penosa por reivindicarse, por servir de apoyo en el presente, es una fuerza que contamina los sentimientos de cualquier investigador. Jorge Washington alguna vez dijo: *“El gobierno fundado en la fuerza y el miedo es como el fuego, a la vez servidor, peligroso y tirano terrible. No dejéis nunca ni por un momento el gobierno en manos irresponsables”*. Todo régimen impostor es una regresión y todos aquellos que cooperan con los rebeldes que usurpan el gobierno, no tienen más que el camino de exponerse a las justas consecuencias de su traición.

7.- A la comunidad internacional le decimos que nuestra situación afecta a muchas regiones del mundo, estamos deseosos de remediar las cosas, es preciso que el

mundo nos tenga paciencia y espere un poco más de tiempo; que nos permita echar las bases de un sólido gobierno, tenemos elementos, y hay, sobre todo, una poderosa “corriente de organización política”; les digo que las señales más saludable por ahora son la poca o ninguna fe en los políticos, así como la ausencia de libertad, justicia, bienestar social y los recurrentes desordenes políticos y administrativos que se están sucediendo, lo cual quiere decir que la sociedad en general ya piensa valerse por sí misma; pronto en lugar de revolucionarios y políticos daremos al mundo capitanes de la industria, sabios, artistas y embajadores de la paz: porque el material humano de los mexicanos es espléndido, pero aún no está labrado.

8.- Es de interés público, liberar al estado de las asociaciones políticas llamadas “partidos políticos”, debiendo cesar de manera, temporal o definitivamente cualquier mandato popular posterior, por la vía del sistema de representantes de elección de partidos por mayoría relativa y representación proporcional.

9.- Es de interés público, restituirle crédito a la función pública, lograr una claridad expositiva de proyecto de gobierno, eludiendo la pluralidad artificial de muchos partidos; y la mercadotecnia del abuso de la palabra en los medios como factor que nos embohe.

10.- Es contra el interés público, que los partidos no cumplan las funciones que para conquistar el poder justifican su existencia; conspiran para conservar el poder, padecen fenómenos sociológicos insuperables que en lugar de ayudar, suplantán y descuartizan al estado; y además, no pasan la prueba del sufragio mayoritario en las urnas.

11.- Es contra el interés público, que la crisis de ineptitud congénita de la gran mayoría de los representantes populares provenientes electos por la vía de los partidos, ponga en peligro la seguridad de las tareas del Estado.

12.- Es contra el interés público que los derechos e intereses de los dirigentes, dueños y propietarios de las asociaciones políticas llamadas “partidos” (los políticos), se opongan radicalmente a los derechos, fines e intereses del pueblo y del estado.

13.- Es contra el interés público, prevenir que la alternancia en el poder de varios partidos, no resuelve los grandes problemas nacionales, por el contrario, por su posición de interés y adversidad, los complican.

14.- La existencia de partidos políticos no es útil ni necesaria, solo son intérpretes (traductores) de pensamientos políticos; intermediarios (negociantes, mediadores, traficantes) en la transición democrática, agencias de empleos para una reducida parte de su membresía de socios, y que como personas jurídicas colectivas no tienen a su cargo el cumplimiento de facultades propias de las tareas de gobierno, eso compete a los candidatos electos como personas jurídicas individuales también llamadas personas físicas o seres humanos.

15.- Es contra el orden público, contra la moral y el derecho natural (de la naturaleza del ser humano), buscar la democracia a través de la división y el enfrentamiento de clases sociales afines, de la discriminación entre los connacionales.

16.- Es contra el derecho natural, la moral y el orden público, que para fortalecer la imagen de las asociaciones políticas, se utilicen recursos públicos haciendo aparecer como de útil su existencia, cuando, se descubre que, sus filosofías, doctrinas y postulados son meras interpretaciones o copias de los pensamientos que solo nos han llevado al fracaso.

17.- Es contra el interés del estado, el derecho y el orden público que las personas jurídicas colectivas llamadas “asociaciones políticas o partidos”, restrinjan las capacidades de ejercicio de las personas jurídica colectiva llamada “Estado federal mexicano, entidades federativas y municipios”.

18.- Es contra el interés público que las representaciones populares patrocinadas por los partidos, comprometan la estabilidad del bien común, hagan dispendios de fondos públicos, mantengan un autoritarismo de la maquinaria oficial, se den oportunidades para la corrupción, propicien la desviación del poder, auspicien el tráfico de influencias los fraudes y abusos de la confianza que fue depositada en su carácter de sirvientes.

19.- Es de interés público, recibir una actuación de representantes bajo la armonía de la ley, con calidad, calidez, sensatez, orden, sobriedad y buen comportamiento, para lograrlo, la sociedad está facultada por el derecho positivo para usar, gozar y disfrutar de prerrogativas políticas, bienes jurídicos protegidos por las leyes del país como exclusivos de su patrimonio, de los cuales puede hacer uso a fin de propiciar una mejor evolución de los procesos naturales del hombre en sociedad, de manera anticipada para prevenir los riesgos a las futuras generaciones.

20.- Es un fraude a la ley, que el voto sea impersonal, es decir, el elector no vota por un ciudadano (una persona), vota por el símbolo o emblema representativo de una asociación política a la que él pertenece, lo cual es indebido, pues en el proceso de selección significa la elección de una persona física no el de una persona jurídica.

21.- El pueblo está facultado para intervenir en defensa de la nación y del estado; la jerarquía superior de su investidura le permite buscar, erradicar el comportamiento malsano de las fuerzas negativas provenientes de los partidos políticos.

22.- Al intervenir como personas físicas en la vida política del país, lo hacemos en defensa _ muy lógica _ de nuestros derechos a la libertad de elección y a la salvaguarda de los intereses generales de la comunidad y del estado.

23.- Es un deber humano, espiritual y legal, participar en la vida política de la comunidad haciendo lo necesario para corregir las imperfecciones del sistema político mexicano, buscar que la sociedad en que vivimos, sea lo más justa y social posible, en donde estemos orgullosos de una raza humana de servidores públicos más

equilibrados y seguros de sus responsabilidades, de aquellos que nos aparten de la angustia de la incertidumbre de las fantasías y de las promesas artificiales de desarrollo, para que, bajo criterios racionales, no se pierdan de vista los verdaderos objetivos para los que existe la figura jurídica del Estado.

24.- Se puede quitar importancia al papel de los partidos, quitándoles el privilegio de ser los únicos en la concreción del principio democrático, y se pueden impulsar las candidaturas, fórmulas o planillas sin registro.

25.- La sociedad civil puede liberar al Estado de las fuerzas negativas de los partidos, y en su lugar impulsar que la sociedad civil tome el poder. Representa un deber cívico humanamente moral, espiritual y legal por el que se busca rehabilitarlo en el cumplimiento de sus fines, brindándole sanidad al ejercicio del poder, evitándole la infinidad de abusos, desordenes, desvíos, ultrajes, ataques a las instituciones, a la forma de gobierno y al estado de derecho.

26.- Constitucionalmente los ciudadanos tienen la potestad o prerrogativa (derecho reconocido por la ley) de ser votados, (Derecho Pasivo) no es sino lo que la doctrina jurídica reconoce como derecho subjetivo; esa facultad es propia de las personas, (de los seres humanos) es decir, el interés jurídico es de los individuos, compete al patrimonio de sus bienes jurídicos, es parte de sus derechos políticos como ser humano en sociedad.

27.- La legalidad de este proceder se funda en el derecho de poder ser votados para todos los cargos de elección popular según el artículo 35 fracción II, de la Constitución Federal, (voto pasivo) por el que cada ciudadano, individual y libremente puede decidir intervenir o no en los procesos electorales para promover su propia candidatura, sin necesidad de asociarse ni de ser patrocinado por algún partido político, buscando integrar cualquiera de las representaciones propias de un cargo público de elección popular directa o indirecta.

28.- Se trata de hacer efectivo el derecho a la facultad de disponer libremente de la propia voluntad de una persona en hacer uso de sus prerrogativas y de sus bienes jurídicos protegidos por la ley como parte de su patrimonio, atendiendo a la capacidad que las normas legales confieren a las personas jurídicas individuales, para ser titular de derechos y obligaciones o para hacer valer aquellos o cumplir éstas, así como a ejercer sus derechos adquiridos y todo aquello que represente expectativas de derecho o derechos creados a su favor por las fuentes de la ley.

29.- Que haciendo uso de la candidatura NO registradas el elector puede tener la opción de decidir respecto de aquellas personas cuyas virtudes sean la generosidad, el altruismo, la liberalidad, las que son conocidas como gente bien intencionada en procurar el bienestar de la colectividad y que sean muy resistentes a las inercias de las tentaciones de los intereses malsanos o placenteros de su puesto público.

30.- Esta es una acción lícita, susceptible de realizarse, un ideario de carácter individualista, el que no es antisocial, aquel que representa la forma de comprender y colaborar con la sociedad en la solución de sus problemas.

31.- Es de interés público entender que el fundamento de la legitimidad de un movimiento contrarrevolucionario se puede sustentar en la filosofía del siguiente pensamiento:

"PAPELES PARA EL PROGRESO": Autor: Jorge Botella. Número de tema 39. Julio-agosto de 2008 en el que cita lo siguiente:

"El movimiento ciudadano que se opone a la validez o la permanencia de un estado revolucionario es lo que se llama contrarrevolución, su fundamento social es que cada revolución altera el proceso lógico de participación, representación y tolerancia.

Los procesos revolucionarios, que generalmente siguen a la alteración de los derechos de los ciudadanos, se apoyan en parte en las deficiencias del Estado actual, pero sobre todo en la ansiedad social que aspira a mejorar su bienestar. Lo que generalmente sucede después es que los ciudadanos, independientemente del logro o el fracaso de su progreso en el bienestar, perciben que toda revolución se dedica a sí misma y es intransigente para evolucionar con los tiempos y deseos sociales.

Cuanto más la revolución predica la rectificación de los hábitos comunes de la tradición, más rápidamente la desilusión, porque establecer nuevas formas de comportamiento con mayor frecuencia tiene un impacto con criterios de libertad previamente establecidos. El axioma esencial es que los ciudadanos no aspiran a ser libres, sino simplemente a ejercer su libertad.

La contrarrevolución nace desde el momento en que triunfa una revolución y se establece como una forma de principios estatales que aspiran a permanecer sin cambios, lo que socava la iniciativa social para que las mayorías representativas disfruten permanentemente del mandato de hacer al Estado como en cada momento. los ciudadanos lo quieren.

La contrarrevolución corresponde más a un sentimiento social que a un complot organizado y es por eso que progresa lentamente en su peso político, a pesar de que la mayoría son los ciudadanos que comparten la resistencia al poder revolucionario constituido.

La contrarrevolución que no quiere ser una alternativa de revolución, sino un Estado libre, más o menos democratizado según su cultura política, tiene que darse cuenta de que la autoridad proviene del pueblo, pero no de acuerdo con la consideración de las masas, sino como la suma de testamentos individuales que guardan su decisión permanente de representatividad. El objetivo final de cualquier contrarrevolución natural es la configuración de estructuras representativas como garantía del ejercicio de la libertad, no tanto porque hacen efectivos todos los derechos, sino porque los derechos

son porque los ciudadanos los experimentan y los exigen, disfrutando de una perspectiva de consolidación que es carente de la rigidez doctrinaria revolucionaria que idealiza los derechos no como consecuencia de las relaciones sociales, sino como la realización de una idea de Estado en cada individuo.

Frente al idealismo revolucionario, la contrarrevolución se caracteriza por la falta de una ideología, y es por eso que puede reunir formas muy diferentes de entender la política, que es el verdadero reflejo de la libertad. El único dogma que se tolera es el de no ser dogmático, ni siquiera en lo que deberían ser los medios de liberación. Y es que lo que une a la sociedad, incluso sobre los sistemas legales, es el sentido común.

32.- Es de interés público entender que la DEMARQUÍA como nuevo sistema alternativo de gobierno, nos ofrece las siguientes posibilidades:

La DEMARKIA también llamada "*Conferencias de Consenso*" deliberaría y tomaría decisiones sobre políticas públicas de la misma manera que los jurados llegan a veredictos en casos penales, en este caso, sobre todo tipo de asuntos que incumben al Estado. La "DEMARQUIA" trata de superar algunos de los problemas funcionales de las democracias representativas convencionales, que en la práctica han sido manipuladas por intereses especiales y que plantean una división entre los políticos profesionales (incluidos en esta categoría los que forman parte de los grupos de interés) y un electorado básicamente pasivo, intransigente, poco involucrado y a menudo desinformado. Según el profesor John Burnheim, la elección aleatoria de los encargados de la formulación de políticas facilitaría la participación de los ciudadanos comunes y dificultaría la participación de los interesados en corromper los procesos electorales. La "Demarquía" es un sistema que tiene como objetivo cambiar la democracia representativa o unos pocos intermediarios, mediante una democracia directa que garantice la inclusión de todas las personas en los procesos electorales.

La "DEMARQUIA" ofrece las siguientes ventajas:

- 1.- La sociedad aprende a realizar directamente las tareas del gobierno, hay deliberación ordenada, participación social, independencia de los miembros de la asamblea, diversidad de opiniones, descentralización y agregación de muchos.
- 2.- La toma de decisiones es más sensata e inteligente.
- 3.- La democracia se perfecciona, porque se crea un marco de comprensión colectiva.
- 4.- Desaparición de la segmentación y polarización ejercida por las partes.
- 5.- Las partes serán reemplazadas por asambleas.
- 6.- Nuevos valores ciudadanos aparecerán al servicio de la solución de problemas colectivos.

- 7.- Habrá un cambio cualitativo en la mentalidad ciudadana.
- 8.- Se evitará tomar decisiones que afecten el interés general.
- 9.- Habrá una identidad colectiva en torno al bien común de la comunidad, un pueblo liderado por la razón y la sabiduría de los compañeros estará más dispuesto a respetar el marco legal, cuando las soluciones se extiendan horizontalmente y no de arriba a abajo.
- 10.- Tendremos procesos electorales sin costo alguno.
- 11.- La ideología de los hablantes será variada y plural en lugar de cerrada.
- 12.- La representación social y el nivel de estudio de los temas serán más amplios.
- 13.- El liderazgo se comparte en lugar de ser solo u oligárquico.
- 14.- El prestigio y la fiabilidad de los ciudadanos serán de mayor calidad que la que ahora ofrecen los políticos del partido.
- 15.- Se evitan las ausencias, la pérdida de tiempo y la relajación gradual de los tomadores de decisiones.
- 16.- Las decisiones de los asuntos serán imparciales.
- 17.- El poder se distribuye en lugar de concentrarse.
- 18.- La lealtad es consigo misma y no con un partido o sus líderes.
- 19.- Evita las confrontaciones de grupos porque no hay grupos.
- 20.- En la resolución de asuntos se obtiene un triunfo colectivo y no de grupo o partido.
- 21.- El método de trabajo es colaborativo en lugar de corporativo.
- 22.- La ética humana dirigida a ayudar a la humanidad estará presente en lugar de ausente.
- 23.- Habrá importantes cambios sociales que transformarán lo viejo que ya conocemos.
- 24.- Evita extremismos radicales.
- 25.- Evita fanatismos extremistas.
- 26.- Evita las falsas democracias “relativas” o “proporcionales” ideadas por las mentes perversas de los rebeldes revolucionarios.

AQUÍ UN EJEMPLO DEL PROCESO DE SELECCIÓN ALEATORIO

Un ejemplo de un procedimiento para un sorteo aleatorio es el siguiente:

Utilizamos el programa de computadora llamado "EXEL", primero ubique la pestaña "FORMULAS", seleccione la opción "INSERTAR FUNCIÓN" (fx) función que se llama RANDOM. ENTER luego, CLIC en IR, luego aparece, se selecciona con el puntero, CLIC en ACEPTAR y se abre una ventana llamada "ARGUMENTOS DE FUNCIÓN" donde podemos escribir un número mínimo más bajo y otro máximo más alto por separado en dos celdas diferentes y luego CLIC para ACEPTAR para que el número seleccionado aleatoriamente por el procesador (PC) aparezca automáticamente.

NECESIDAD DE CONCIENTIZAR SOBRE 10 POSTULADOS DE EDUCACIÓN SOCIAL.

- 1.- De la diferenciación entre una “sociedad doméstica”, una “sociedad civil” y una “sociedad política”.
- 2.- De la diferenciación entre una “Constitución Social” y una “Constitución Política”.
- 3.- Del falso principio de “soberanía nacional del pueblo”.
- 4.- Del falso principio de “igualdad” como origen del gobierno.
- 5.- De la naturaleza jurídica del “mandato político constitucional”.
- 6.- De la situación de “los electores”.
- 7.- De la situación de “los Gobernados”.
- 8.- De la situación de la “clase trabajadora”.
- 9.- De la situación de la “Suprema Corte de Justicia de la Nación”.
- 10.- De la integración de una “Asamblea Constituyente”.

1.- DE LA DIFERENCIACIÓN ENTRE UNA “SOCIEDAD DOMÉSTICA”, UNA “SOCIEDAD CIVIL” Y UNA “SOCIEDAD POLÍTICA”.

Examinaremos algunos aspectos de los tres tipos de sociedades: “*familiar o doméstica*”, “*civil*” y “*política*”.

La palabra “*civil*” tiene dos derivaciones, una relativa a la cosa o “*civitas*” Ciudad y otra “*cives*” tocante a las personas. La palabra ciudad, que en sentido riguroso o

gramatical significa tan solo cierta clase de población perteneciente a un Estado. Carácter pues de *“ciudad”* que tiene la sociedad civil, y de ciudadanos con que en ella figuran sus miembros, basta para conocer la sociedad civil y distinguirla de cualquier otra. *“La sociedad civil es”*: la transición del estado doméstico o familiar al de estado civil o social, tal como la sociedad doméstica tiene una causa natural o necesaria, un objeto esencial, por lo mismo la sociedad civil tiene un fin determinado. La *“sociedad familiar”* se crea en base a un contrato y en él no se puede prescindir de los individuos, de igual forma la sociedad civil, necesita sin duda, darle forma escrita a su constitución social. La *“sociedad civil”* tiene un fin determinado e idéntico al de la *“sociedad familiar”*, el de hacer efectivo todos los bienes que la especie humana pueda disfrutar, el cumplimiento de todos los deberes que la ley de la naturaleza le impone con arreglo a su origen, a sus relaciones, a sus facultades y a su fin.

Definida la *“sociedad civil”* es: Un conjunto de familias unidas entre sí por un *“vínculo de ciudadanía”* sometidas invariablemente a las leyes de la naturaleza y la *“dirección del gobierno de una autoridad humana”* para conseguir por este medio el fin particular de cada uno, y el común de toda la sociedad.

Se utiliza el término *“vínculo de ciudadanía”* para referirse a los individuos en particular y desmarcarlos de cualquier persona del gobierno; se habla de un *“gobierno humano”*, para establecer el poder de autoridad de una parte de esa sociedad y que corresponde a los padres de familia en el caso de la sociedad doméstica y al pueblo para el de la sociedad política.

La *“sociedad familiar”* entra en la *“sociedad civil”* pero sin perder su naturaleza. Por ejemplo: Los padres son la base del gobierno, los hijos la base del ciudadano, el doméstico como la base del súbdito y un conjunto de códigos de conducta que representan sus principios o filosofía familiar. La *“sociedad civil”* es un producto de la *“sociedad familiar primitiva”*, esta transición ocurrió conforme se fueron incorporando un mayor número de individuos a la ciudad, sucediéndose una configuración a la que se le puede llamar *“sociedad familiar en segunda potencia”*, porque es el segundo producto de la humanidad después de la sociedad doméstica. La *“sociedad civil”* es un universo de familias: porque en ellas vemos la estampa legítima de lo *“civil”*, de cierto tipo de población compuesto por individuos que radican en un territorio determinado, y cuya convivencia se lleva a cabo bajo una forma de gobierno cuya dirección se pone a cargo de cierto tipo de sirvientes que forman una servidumbre o *“sociedad política”*. Así tenemos que a la vista están tres tipos de sociedades, la doméstica, la civil y la política. La *“sociedad civil”* no entra como tal en la *“sociedad política”*, es decir, el conjunto del grupo de familias no entra en la categoría de *“sirvientes”* ni puede quedar subordinados a ésta pues, perdería su naturaleza civil y su carácter omnipotente de *“autoridad nacional soberana”* y de superioridad jerárquica frente a los de las sociedades políticas.

La *“sociedad familiar ó doméstica”* en el orden personal es un grupo pequeño de individuos que forman una familia, la sociedad civil es una reunión de varios grupos de familias, en cambio, la *“sociedad política”* es: *un grupo pequeño de sirvientes*

(condición de ocupación u oficio) que tienen categoría de “políticos”, que son personas que se distinguen por tener habilidades específicas en un arte de los servicios públicos relativos al trazo y la fórmula de la organización de los asuntos requeridos por la sociedad civil sobre su forma, tipo o modelo de gobierno que es acorde con el cumplimiento de su fin. Además se dice que el político como persona, se distingue por ser un individuo atento, diplomático y cortés (urbano), lo que es acorde a su condición personal de subordinación.

La “*sociedad política*” se crea con gente perfectamente diferenciada del común de los demás ciudadanos, son personas que tienen ciertas habilidades en las tareas del gobierno (las tareas del Estado) cuya personalidad jurídica se obtiene en base a la suscripción de un contrato de mandato que físicamente se materializa y configura en un documento llamado “*Constitución Política*”, misma que representa la contextura de la relación de trabajo de los “*políticos*” con la “*sociedad civil*”. He aquí la diferenciación entre un “*individuo político*” y un “*individuo social*”.

2.- DE LA DIFERENCIACIÓN ENTRE UNA “CONSTITUCIÓN SOCIAL” Y UNA “CONSTITUCIÓN POLÍTICA”.

Una idea exacta del término “*constitución*” nos indica que es: “*la esencia, calidad, naturaleza y configuración de una cosa que la constituye tal como es*”, la “*esencia*” entonces es una cosa y la *constitución* es otra: ésta (la constitución), supone la existencia de aquella (la esencia): la “*constitución*” tampoco puede ser calidad, naturaleza o configuración porque una calidad es un “*modo*”, y el *modo* supone “*sustancia*” y por lo mismo la existencia de algo como lo es la *constitución*: la misma palabra nos indica que se trata de una reunión o conjunto y no de un solo elemento; si pasamos a la derivación latina, encontramos la palabra “*constituere*”, compuesta de “*cum*” y “*statuere*”: que viene del verbo *fundar o instituir y hacer de nuevo*, y la idea de colocar a una persona de una manera estable, lo que parece más conforme con el verbo “*stare*”, cuya idea forma la base del verbo “*statuere*”, claro es que significa “*el conjunto ó reunión actual de los medios y condiciones propias del establecimiento naturaleza y configuración de una cosa*”.

Apoyados en esta conclusión entendemos por constitución en general: “*la reunión efectiva de todos los atributos esenciales o naturales, dispuestos de la manera más a propósito para establecer de una manera fija y permanente la configuración de la cosa de la que se trata, de modo que tenga en si misma todos los elementos necesarios de existencia, de conservación, de desarrollo y de perfección que se requieren a su objeto final*”.

Se pretende darle sustento a la tesis de la configuración y establecimiento de la pretendida “*constitución social nacional del pueblo mexicano*”, lo que requiere del concurso actual de todos los atributos esenciales necesarios que son:

1.- Un conjunto o cuerpo de *individuos*. = Elemento de *existencia* de la vida social.

2.- Relaciones generacionales *históricas*. = Elemento de *conservación y desarrollo* social.

3.- Un código o cuerpo de *leyes*. = Elemento de *ordenen* esas relaciones sociales.

4.- Una forma de *gobierno*. = Elemento de *modo de existir* de la sociedad.

De estos elementos podemos distinguir claramente que las leyes no son individuos, que los individuos no son las leyes, que las leyes no son las relaciones generacionales históricas, que tampoco las relaciones generacionales históricas son la forma de gobierno, que la forma de gobierno no son las leyes, que las leyes no son la forma de gobierno, que el conjunto de la totalidad de los individuos del pueblo no son el gobierno, que el modo o forma de existir no son el conjunto de los individuos, etc., etc., porque cada uno de los elementos, como ya se dijo, se desmarca muy claramente del otro. Cuando hablamos de un cuerpo humano por ejemplo, se dice que tiene una “*constitución física*” y comprende un conjunto de sistemas (respiratorio, digestivo, muscular, sanguíneo) por las cuales el cuerpo existe, y que aseguran de manera perfecta su vida y el ejercicio de sus funciones o fines para los que fue creado.

Así, como en el cuerpo humano, en el Estado (nación) existen un conjunto sistemas, la llamada “*constitución política*” tiene el carácter de un “*sistema jurídico*” (de leyes) que se encargan de regular una parte del engranaje del gran cuerpo de la sociedad civil mexicana, por que desempeña cierto tipo de funciones o tareas específicas, pero no es la totalidad de la configuración del cuerpo del pueblo mismo.

El código que conocemos como “*constitución política*” es un conjunto ordenado de normas fundamentales del “*sistema jurídico*”, que el cuerpo de la sociedad civil usa y que le sirve para regular “*la forma de gobierno*” (su modo de existir) de la que se encargan un grupo de 628 congresistas (senadores y diputados), 1 un presidente y 11 once ministros; que hacen un total de 640 operadores llamados “*servidores públicos*” a los que se les reconoce el carácter de “*políticos*”, aquellos que se distinguen por tener habilidades en el arte u oficio de la conducción de las tareas el Estado, tareas como la ejecutiva, la legislativa y la judicial, y que son contratados para la prestación de sus servicios profesionales (artes y oficios) observando las normas del contrato de mandato oneroso o “*permiso delegado*” para que se encarguen de una diversidad de actos jurídicos que consisten en:

a.- Hacer la ley. = Crédito para Legislar. 628.- Empleados Congresistas.

b.- Aplicar la ley. = Crédito para Ejecutar leyes. 1.- Empleado Presidente.

c.- Sancionar la ley. = Crédito para Juzgar. 11.- Empleados Juzgadores.

Pero, “*la sociedad civil*” no se reduce a simplemente a hacer la ley o a tener congresistas, tampoco a aplicar las leyes o a ser presidentes, y mucho menos a

sancionar las leyes y ser ministros o juzgadores, es decir, éste modo o *“forma”* de hacer las tareas gobierno no son la configuración de la naturaleza del conjunto del pueblo mexicano llamado sociedad civil, el universo de éste pueblo no es tan poco ni tan pobre para ser solo eso, obviamente, la configuración de su cuerpo es mucho más que simplemente legislar, ejecutar leyes y juzgar.

Así, la “constitución política”, queda reducida a una mera colección de leyes que regulen los *“modos de hacer, de aplicar y de sancionar las tareas de la organización de los asuntos de la sociedad civil”*; es un simple código o cuerpo ordenado de normas relacionadas pero, tal código no son los individuos, esas normas no contienen registros sobre las relaciones generacionales históricas, no es su autoridad soberana, no es su desarrollo social, no es el estudio de su espíritu, no es su ciencia, no son sus costumbres, no es su industria, no es su tecnología, no son sus necesidades, no es su filosofía como país, no es su clima, en fin, no es todo lo propio de su naturaleza esencial del cuerpo de los grupos de familias domesticas que integran o han integrado la sociedad civil mexicana. He aquí lo que haría la diferencia entre la proyectada *“constitución social”* y lo que es una *“constitución política”*.

La “constitución política” no está configurada conforme a la naturaleza del cuerpo completo y de las condiciones propias requeridas para fundar la personalidad de la generalidad y la esencia de la sociedad civil de un pueblo mexicano, se trata de un simple código que regula un mandato o *“contrato de trabajo”* exclusivo para con las relaciones laborales entre dos partes que son: la sociedad civil (*el pueblo-patrón-mandante*) y los miembros integrantes de las sociedades políticas (*los políticos-sirvientes-mandatarios*), aquellos encargados, como ya se dijo, de la habilidad, destreza y el arte de la realización de tareas específicas de aplicar una forma de gobierno determinada.

La configuración de naturaleza de tal documento contractual (contrato) al que se le llama *“constitución política”*, encontraremos que se compone de varias secciones, como son: un TÍTULO PRIMERO que tiene carácter introductorio, también llamado de *“garantías”* o más bien dicho, de *“afianzamientos y seguridades”*, en el que las partes (gobernantes y gobernados) convienen en darse reciprocas concesiones, o *“prendas”*, *“fianzas”*, *“cauciones”*, *“avales”*, *“hipotecas”*, *“créditos,”* sobre los límites de ciertas libertades, derechos y obligaciones recíprocos; en el TÍTULO SEGUNDO se establece la jerarquía de autoridad superior de una de las partes (el pueblo) respecto de la otra (los políticos sirvientes) o sea, *“la soberanía nacional del pueblo”*; dejando bien claro quién manda y quien obedece; en el TÍTULO TERCERO se previene la distribución de los departamentos ó áreas de trabajo de que consta la institución del Estado, un departamento legislativo, otro ejecutivo, y uno judicial, y sus respectivas actividades o facultades y que consisten en, *hacer leyes, aplicar leyes y sancionar leyes*; en seguida el TÍTULO CUARTO en él se contiene un sistema de medios de control del irregular comportamiento de los servidores y los procedimientos sobre responsabilidades; en el TÍTULO QUINTO se estipulan las condiciones de manejo de las áreas menores de trabajo municipales; el TÍTULO SEXTO hace una distinción y

regulación de las relaciones de trabajo entre particulares y las de los políticos con el Estado y, por último, el TÍTULO SÉPTIMO establece ciertas prevenciones generales.

Las reciprocas concesiones llamadas “*garantías constitucionales*” según sus respectivos artículos (del 1º al 29), sólo tienen sentido para quien ingresa a nuestro país habiendo tenido en otro, la calidad de “esclavo”, sirve para quien es un “indígena”; para quien es un “analfabeta”, para un “discriminado” por el uso de su sexualidad o de su estado de salud; para un “escritor” afecto a publicar sus ideas; para un “peticionario” frecuente; para un “organizador de reuniones políticas”; para aquel que es “coleccionista” de armas en su domicilio, para un “nómada”, para un “afecto a recibir títulos de nobleza”; para un “presunto delincuente agraviado y que no es escuchado”; o para un “perseguido por sus creencias religiosas”; en suma, todas estas concesiones no tienen mucho que ver con la gran mayoría de la población la que no se encuentra en el caso de esas hipótesis concretas, y a los que de nada les sirven.

Se sostiene por expertos en derecho, que las “*constituciones políticas*”, de todo el mundo no son una condición indispensable de existencia y conservación de la sociedad civil. La pregunta obligada es ¿por qué?, porque sin ellas existen y han existido constantemente muchas naciones.

De facto, la historia de estos pequeños códigos o formularios de contrato-mandato llamados “*constituciones políticas*” sólo contienen la forma de cómo los expertos en el arte de la política se encargan de la organización de ciertas tareas del Estado como son las de crear, aplicar y sancionar leyes, (órdenes que les da la sociedad civil), además, esta concepción contractual es relativamente nueva; en cambio la sociedad civil de los pueblos es tan antigua como el mundo tenga memoria y desde entonces pudo dar muestras de que funciona sin contratos constitucionales y sin los servicios de los políticos.

Cuando se habla de la necesidad de la creación de una “*Constitución Social Nacional*” y se recomienda su configuración bajo una forma escrita, también se ha pensado en que ella no pueda constituir una necesidad: porque una necesidad satisfecha deja de serlo por esto mismo: Por ejemplo: cuando han aparecido las “*constituciones políticas*”, han sido precedidas de nuevas dificultades, complicaciones y trastornos, cuando es el caso que éstas fueron inventadas con el objeto de aliviar dificultades; pero tales no han conseguido más que multiplicarlas. Para esto, se parte de la base consiente de que no ha existido nunca en la historia la configuración escrita de una constitución social nacional de ningún pueblo, de que si algo como la sociedad civil existe físicamente y su naturaleza reúne todos los atributos esenciales que entran en la noción de existencia física y social, y por consiguiente la de los individuos, las relaciones sociales, las leyes, las costumbres, la filosofía y el gobierno, y que se identifican como la sociedad misma: la existencia de ésta no es otra cosa que su “*constitución social*” tan solo hace falta darle forma escrita:

La suspensión o ausencia de un solo atributo, le haría perecer; y por consiguiente, donde hay sociedad hay constitución social; donde no hay constitución social, se supone que no hay pueblo.

3.- DEL FALSO PRINCIPIO DE “SOBERANÍA NACIONAL DEL PUEBLO”.

En teoría se entiende que un pueblo “soberano” está en posesión de una omnipotencia social: Todos los derechos son suyos; de lo contrario no sería omnipotente; y no siendo omnipotente no sería soberano. Por la misma razón todas las obligaciones están fuera de él; porque si el tuviera alguna obligación que cumplir, sería súbdito: soberano es el que manda, súbdito el que obedece; soberano es el que tiene derechos, súbdito el que tiene obligaciones. Así el principio de la soberanía popular, que es un principio ateo, es también un principio tiránico, por que dónde hay un súbdito y no tiene derechos, y un soberano que no tiene obligaciones, hay tiranía.

El ser humano en contacto con los demás hombres (*relaciones generacionales históricas*), tuvo la necesidad de la “*igualdad*”, y por consiguiente la de derechos recíprocos y limitados: entonces sintió otra necesidad de una regla que presidiera a su reciprocidad y a su limitación: esta regla es la “*justicia*”.

El principio de la soberanía popular no reconoce reciprocidad en los derechos ni limitación en las obligaciones. La idea de justo desaparece donde solo hay señores y esclavos: de aquí resulta que el principio de la soberanía siendo ateo y tiránico, es también un principio inmoral, por que destruye la justicia. Es tan cierto que la justicia y la soberanía popular no pueden coexistir en el mundo, que reconocida la existencia de la primera, queda aniquilada la segunda, porque si el pueblo solo puede hacer lo que la justicia le exija, el pueblo es súbdito y la justicia es soberana, ante esta verdad, la soberanía del pueblo es un absurdo.

Si la soberanía reside en la voluntad general, y la voluntad general es la colección de las voluntades particulares, todos los individuos deben tener una parte de poder soberano: si el poder soberano no se realiza sino por medio de las leyes, todos los individuos aún los menores de edad deben tener una parte activa en la confección de las leyes. Los ignorantes por ejemplo, tienen los mismos derechos que los sabios, porque tienen una voluntad como ellos: las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres, porque tienen una voluntad como ellos: los niños tienen los mismos derechos que los padres, porque tienen una voluntad como ellos: los proletarios tienen los mismos derechos que los poderosos, porque tiene una voluntad como ellos: en fin, los dementes deben reclamar una parte de su soberanía, porque al negarles el cielo la razón, no los despojo de la voluntad, y la voluntad les hace soberanos también.

Las constituciones políticas y las elecciones, no han de ser jamás la expresión de la razón ni de la expresión de la voluntad general: Por ejemplo: Todos los congresistas están en un foro: la voluntad se ha verificado ya: su resultado es, que por la mitad más uno de todas las voluntades ha sido aprobada una ley. Según la teoría de la soberanía popular, esa ley no obliga sino a los que la han votado: la voluntad es inenajenable,

porque su enajenación sería un suicidio: una voluntad que se somete a otra voluntad se enajena (se vende), y enajenada se aniquila. *¿Qué es entonces la soberanía del pueblo?*; según la constitución política actual, es un absurdo, un imposible.

Si la soberanía del pueblo es un error, todas las constituciones políticas del mundo son impotentes para cambiar esta circunstancia; pero si es una verdad, no se necesita de leyes constitucionales para sostenerse. Lo cierto es que concluida la etapa de una elección, el candidato congresista electo se va con su voluntad y tiene la posibilidad de hacer con ella lo que le parece, en cambio el elector se queda con la suya propia sin saber que fue engañado. Nada más ridículo que reconocer en el pueblo un poder que ni es capaz de concebir, le es imposible discernir y mucho menos aplicar.

Si es que el pueblo mexicano tiene algún *“poder”* o facultad de superioridad jerárquica sobre los “políticos”, los llamados *“servidores públicos”*, no solo debe considerarse como un poder instituido simple y llanamente *“a letra muerta”*, también, puede estipularse por escrito con sus alcances y limitantes pero, lo más trascendental e importante es, establecer esto en una escritura todo aquello que se refiera a la configuración de su cuerpo completo, una que contenga de manera fija y permanente todos los elementos de existencia de la personalidad jurídica colectiva del pueblo mexicano, de su naturaleza, de su cultura, de sus costumbres, de su carácter, de sus necesidades, de su conservación, de su desarrollo social, de su filosofía, de su historia, de su espíritu, de sus propósitos, de sus objetivos, en fin, toda aquello que siendo de carácter social, es ajeno o no está contenido en el contrato celebrado con los políticos, es decir, si es que la sociedad civil del pueblo mexicano existe en la naturaleza física, jurídicamente debiese consolidarse esa situación en un documento escrito que se sugiere lleve por nombre *“constitución social nacional del pueblo mexicano”*, un documento que aborde aspectos diversos a los de hacer, ejecutar y sancionar leyes.

Para saber sobre la eficacia de las determinaciones que se tomen por un pueblo, derivado de su titularidad jurídica para hacerlo conviene decir, que para mayor claridad en un orden lógico de las ideas tenemos que, el cuerpo de una nación o estado se concibe ó configura de tres elementos que son: 1º.- Un territorio. 2º.- Una población. 3º.- Un gobierno.

Basados en este orden de jerarquía existencial, queda en claro que antes que el gobierno, está la población; antes que la población estará un territorio, de lo que se infiere que no puede ser a la inversa, es decir, no hay la posibilidad de entender a un gobierno sin una población, ni una población sin un territorio.

Para distinguir la capacidad de disposición para legitimar la creación de la pretendida *“Constitución Social Nacional del Pueblo Mexicano”*, tenemos que ver que se trata de una cualidad de las persona, que el poder de disponer una cosa por parte de la sociedad civil en una forma más real, implica una relación que se tiene con el derecho y la capacidad de ejercicio de que dispone para hacer algo y que ese algo tenga eficacia jurídica (validez legal).

No es el caso de que se pueda presentar alguna oposición al respecto, puesto que se parte de la base de usar de un poder nacional soberano omnipotente, (constituyente), el que no tiene rival, en el que ni el espacio territorial ni los sirvientes del gobierno (*los políticos*) están en condición de discrepar válidamente. He aquí la perfecta claridad del símbolo más evidente de la jerarquía de autoridad suprema del pueblo mexicano, que le permite crear un Poder Civil Constituyente.

Aquí se impone la necesidad de hacer un claro desmarque, pues hay que distinguir entre dos clases de soberanía, la “*originaria*” y la de “*ejercicio*” o derivada; la primera se encuentra en el artículo 39 y la segunda en el 41 de la constitución, este último impuesto por los usurpadores, la primera está concebida legalmente como un derecho y la segunda como una obligación. Ahora bien, en virtud de que el pueblo es soberano es claro que no se encuentra sometido a los dictados de dicha Carta, de lo contrario, no sería soberano, pues el soberano no puede llevar a cuevas dentro de ese orden legal alguna responsabilidad, y esto se comprueba muy fácilmente pues en ninguna de sus partes dice que el pueblo tenga obligación de sumisión a sus normas, esa carga solo la tienen quienes fungen como servidores públicos, tan es así que, en las violaciones a dicho Código fundamental, los que alcanzan la categoría de responsables se llaman autoridades; el amparo contra actos de particulares es ineficaz.

Bien es cierto que los “representantes del pueblo” tienen facultad para reformar la constitución, pero no por eso el pueblo pierde su titularidad originaria para hacerlo por su cuenta propia, a mayor abundamiento diré que por el carácter inenagable de tal potestad, la función revisora y modificatoria de la constitución no pasa en propiedad a los bienes de los sirvientes. Muchos sostienen que basta con que lo hagan las cámaras del Congreso, pero si la facultad del pueblo para hacerlo por su cuenta nunca se pierde, entonces solo basta con activarla.

Siendo aún más radicales diremos que se trata de dos actitudes, la primera de “quien quiere” y la segunda de “quien ejecuta”, es decir, de dos momentos; de “quien ordena impositivamente” y de “quien obedece sumisamente”, de esta forma el pueblo no tiene ninguna ataduras, en cambio los sirvientes las tienen todas; si en la práctica esta separación rígida no se está dando, hay que resolver esa situación.

La legitimidad de la integración de un poder constituyente no radica en las mayorías, un soberano no tiene rival que le cuestione ni el momento ni la forma de cómo hace uso de su autoridad, sus determinaciones no admiten oposición o cuestionamientos

4.- DEL FALSO PRINCIPIO DE “IGUALDAD” COMO RAZÓN DE LA EXISTENCIA DEL GOBIERNO.

La igualdad de derechos entre la sociedad civil no solo no ha existido jamás, sino que es siempre imposible bajo todas las relaciones posibles, es decir, imposible según su naturaleza; porque para esto sería necesario suponer hombres sin padre, sin cuerpo, sin facultades. Imposible según la razón; porque si el hombre es un ser eminentemente moral (*parte de las reglas de la enseñanza de las costumbres como reglas que deben*

gobernar la actividad libre de los demás hombres), debió adquirir derechos sobre las personas en razón de su autoridad sobre las generaciones familiares, y de las cosas (bienes, propiedades) en virtud del trabajo.

Lo anterior nos convence de que los hombres no pudieron ser ni un solo instante iguales en derechos: Imposible según el mérito solo de cada uno, porque si en cada país el primer hombre tubo propiedades y autoridad sobre sus hijos, no fue por que tuviera un mérito superior, sino porque estuvo primero, y se hizo soberano de todos sus descendientes y propietario ante todos aquellos que se lo creyeron. Si los hombres son por naturaleza iguales en derechos, ¿por qué los reyes, sacerdotes, prisioneros, ricos y pobres?, ¿por qué todas estas desigualdades sociales?.

En teoría se entiende que en el contrato constitucional celebrado con los políticos, las partes se hacen reciprocas concesiones en los artículos 1º, 2º apartado B-, 4º, 5º primer párrafo, 12, 13 y 31 fracción IV, mas sin embargo en la práctica, los mexicanos recibimos un trato no igualitario cuando los funcionarios del Estado aplican las leyes del orden público, pues éste, en el ejercicio de sus facultades nos ofrece un trato desigual para quienes acuden a la protección del derecho con la esperanza de ser tratado de la misma manera, con los mismos derechos y con las mismas obligaciones, pero no hay tal, pues dicha “*seguridad*” no existe en realidad, el pueblo sigue soportando perjuicios o beneficios desiguales e injustificados.

En base a lo anterior, se precisa entrar al examen de tales presupuestos y con respecto al “*contrato de mandato político*” ó “*pacto social*” entre gobernantes y gobernados, el origen de la existencia del Estado no se basa en el principio de “igualdad”, pues tenemos que, dicho principio presenta características esenciales discordantes como son las siguientes: a.- Extravagante por sí mismo; b.- Imposible en la legislación; c.- Impracticable en la constitución. d.- Terrible en sus efectos y falso en sus principios.

a).- Extravagante por si mismo: El contrato entre gobernantes y gobernados plasmado en la constitución Queretana, la que fue impuesta por los intrusos es ridículo, pues los miembros de una sociedad civil no pueden ser al mismo tiempo súbditos y soberanos, dependientes e independientes; que obedezcan, y que nadie los mande; y por último que sirva y que no tenga señor. Que cada individuo sea súbdito y soberano, toda nación gobernante y gobernada, todo el mundo de una parte y todo el mismo mundo de la otra, ¿son estas las mismas dos partes del contrato?, esto es una extravagancia (rareza), ¿cómo creer que una persona actúa como dos personas o que dos personas hacen una misma cosa?, esto es un absurdo.

El contrato-mandato (*constitución política*) se funda en esta falsa separación mágica. Se necesita pues de un soberano nacional que tenga derechos muy reales; y de la otra una nación que se obligue físicamente a obedecer. Pero si en la colección de hombres no hay uno igual a otro, ¿de dónde se sacaron los elementos humanos diferentes para integrar el gobierno?, ¿sería necesario eludir (eliminar) el derecho a la igualdad y fundar un código de separación de personas? ó sería simplemente de voluntades?, si así fuere, ese documento que los contenga deberá ser muy convincente y positivo,

porque hasta hoy la autoridad de las dos partes del gobierno (*gobernantes y gobernados*) sigue siendo ilusoria.

b).- Imposible en la legislación. Es imposible en la legislación porque sería necesario que los unos estuviesen de un lado y los otros del otro; haciendo los unos la ley y recibéndola los otros; los unos siendo enteramente miembros del pueblo soberano, y los otros enteramente miembros del Estado, luego, porque aun tratándose de la uniformidad de las voluntades, es generalmente imposible, cuándo mucho podría dividirse en una mayoría y una minoría, pero, la decisión de la mayoría no ligaría (sujetaría) a las minorías, pues el pacto social, de donde mana el derecho (el contrato-constitución política) reconoce por base esencial la voluntad general, y, aun cuando fuese posible reunir a toda una nación en la suma aritmética debería contarse todos los seres humanos que tienen voluntad y por consiguiente a los niños, lo cierto es que en ningún Estado se ha juntado la nación entera, y puede decirse que en ninguno se juntará; y por si fuera poco los anteriores inconvenientes no desaparecen aún con la pretendida “representación” de voluntades en el Congreso en razón de que nombrando el pueblo a sus diputados, creará ser el soberano pero se engaña porque, pasada la nominación queda esclavo. ¿Pero el pueblo da a los diputados el poder de manifestar sus voluntades?, las que deben conocerse para manifestarse, y ¿para conocerlas es preciso consultarlas?, ¿cómo consulta un diputado las voluntades de su pueblo antes de manifestarlas en el Congreso?, la voluntad de la sociedad civil no estará debidamente representada sin el concierto (reunión) de las voluntades del pueblo y sus diputados, lamentablemente hecha la nominación se va el diputado con su voluntad y yo me quedo con la mía.

Es pues imposible que los diputados se hagan representantes. Nada vale por que el silencio del pueblo se sobreentienda su consentimiento presunto. Cada uno del pueblo tiene sus razones para callar, estas razones no son señales de aprobación. Resulta entonces que jamás ha existido un gobierno en el que el pueblo completo haya votado una ley y no tiene el poder legislativo, autoridad sobre los disidentes, luego ninguna nación ha podido darse leyes absolutas, entonces, jamás diputado alguno puede recibir del pueblo el poder legislativo, sin embargo, lo desempeñan, pero si no lo tienen del pueblo, ¿de quién lo tienen pues?.

Hablando de la legitimidad de los gobiernos mexicanos, los autores de libros de derecho no han podido sostener la validez de los gobiernos posteriores al del presidente Sebastián Lerdo de Tejada. La razón es muy simple, después del golpe militar dado por un sirviente, el General Porfirio Díaz, se perdió el orden constitucional de la República, algunos de ellos se atreven a sostener que la presunta legitimidad de los intrusos posteriores como Madero, Huerta, Carranza y Calles, deviene del silencio del pueblo y de su adaptación a la aplicación del rigor de la imposición de su nuevo código particular de 1917; falsas afirmaciones como falsos pueden ser ellos mismos, consuelo de tarugos que no ayuda en nada, mentiras que más adelante vendremos esclareciendo.

c).- Inaplicable en la Constitución. Para la validez del “contrato-mandato-político”(constitución política) se necesita de toda la universalidad de los individuos, porque los que dejan de adherirse son disidentes, y los disidentes no pueden formar, bajo ninguna circunstancia esa asociación.

Si se presupone que antes del primer contrato-político-constitucional no había una autoridad ejecutora derivada, ni soberanía ordenadora originaria; la libertad primitiva de las partes era una libertad de absoluta independencia, es decir, antes los hombres no estaban subordinados los unos a los otros, pero si llegado el momento, se ha decidido a asociarse y a subordinarse, es por un acto libre y espontáneo de “*voluntad*” en virtud de su consentimiento y de su voto. Según esto, es claro que ninguno entra en asociación, sino por virtud del consentimiento y de su voto; y si ya forma parte de la asociación, si se halla comprometido en ella, si contribuye a la soberanía y si por su voto se hace todo, se entiende lógicamente que sin ellos (la voluntad y el voto) nada puede haber.

Si un individuo no quiere asociarse, nadie puede obligarlo a ello, ni sujetarlo bajo ningún pretexto por que nació libre, independiente. Mientras el no consienta en asociarse, es perfectamente independiente. Si no se asocia, nadie es su soberano, ni nadie tiene derechos sobre él. Es claro que para que los poderes y los derechos de los asociados se extiendan a todos ellos, se necesita que todos se asocien; y si hay uno solo que no de su consentimiento, la soberanía del Estado no se extenderá sobre ese que completa el todo, o lo que es lo mismo, no habrá la supuesta plena soberanía derivada (poder absoluto de los gobernantes) por que esta tiene una esencia nacional. Para que haya contrato es preciso que todas las partes (individuos) contratantes estén de acuerdo; por eso es preciso que todos los miembros de una sociedad sean conformes.

Resta la dificultad de aquellos hombres acostumbrados a su independencia; habrá muchos que no quieran sujetarse o no estén de acuerdo; pero si hay división, ¿qué se hará para la votación?; Todos los que no quieran ¿deben dejar el país?, pero, ¿con que derecho podrá obligárseles?, al que no quiera ser sometido ni votar y ser votados en una elección, ¿qué hacer con ellos?, ¿emplear la fuerza, la violencia, la injusticia, la autoridad o la emigración forzada?; mejor, estando atentos al derecho natural de la libertad de las personas, debemos trabajar en legislar sobre el respeto al derecho a la disidencia.

d).- Tiene terribles efectos y falsos principios. La Declaración Universal de los Derechos del Hombre, del 10 de diciembre de 1948, con obligatoriedad para todos los países que han suscrito, determinó en su artículo 7o. que: “*todos son iguales ante la ley y tienen derecho, sin distinción, a igual protección de la ley*”.

En esta parte se deben examinarse algunas hipótesis legales de la constitución bastarda de 1917 como son:

El artículo 2º aborda el principio de “igualdad” de oportunidades que debe privar en las comunidades indígenas, y eliminar cualquier tipo de discriminación, sin embargo, dicha “seguridad” no existe al no haberse concretado en la realidad, pues a ese respecto en contraprestación existe la latente “inseguridad jurídica” de la “no discriminación política de los indígenas”, en cambio sí lo son, por citar uno de los muchos ejemplos se me ocurre preguntar: ¿A cuántos políticos “representantes indígenas” conoce usted ocupándose como expertos en el arte y la ciencia de las tareas del Estado?.

El artículo 4º contiene varios derechos garantizados como: 1.- “Igualdad” entre el varón y la mujer; 2.- Acceso a la salud; 3.- A un medio ambiente adecuado; 4.- A que la niñez cuente con elementos necesarios para un debido desarrollo, sin embargo, en los hechos el pueblo no ha podido ver concretadas estas hipotéticas “seguridades”, pues existe discriminación por razón de género, de edad, de sexo, de condiciones de salud y medio ambiente, y limitados elementos de desarrollo para la niñez.

El artículo 5º consagra la “igualdad” en el libre ejercicio de cualquier comercio o industria a todas las personas, sin distinción basadas en nacionalidad, de raza, sexo etc., en cambio, bajo el gobierno de los intrusos no existe tales “seguridades” y ocurre todo lo contrario, los particulares frente al Estado tienen vedado poder dedicarse a renglones especiales de comercio y de industria que éste tiene reservado en exclusiva para sí.

El artículo 10º solo sirve a quien es coleccionista de armas.

El artículo 13 que defiende la “igualdad” al prohibir los procesamientos por leyes privativas o tribunales especiales, declara abolido el fuero, no obstante en los hechos es inexistente tal supuesto de “seguridad”. En cambio, examinada con detenimiento, ella misma es una “ley prohibitiva”.

De lo anterior se infiere que no hay tal “*la igual protección de las leyes*”, lo que nos induce a considerarla una “*ley privativa*”, debiendo entenderse aquella que pugna con el sistema de generalidad, “*en cuanto a su observancia*”, que rige en nuestra legislación, y que sólo se contrae a determinadas personas o cosas, individualmente consideradas, es decir, aun cuándo se refiera a determinadas personas, por su origen ilegal es una ley exclusiva de los amotinados (de ellos y para ellos), sin obligatoriedad para todos.

En cuanto a su observancia, la Carta Queretana, contiene esta proclama la igualdad material o económica o aún intelectual de los hombres, y así, sujetarlos (a todo un pueblo) a una especie de nivelación general establecida por la fuerza, que es la negación misma de todos los demás derechos; tal documento, al haber sido el producto de la comisión de delitos del Código Penal, la hace una ley de delincuentes promulgada “*en cuanto a su observancia*” para someter a la condición de esclavitud a hombres enteramente libres. Para que se comprenda la idea, diremos que la condiciones de todos los seres humanos en la sociedad no son las mismas, bastando

para comprobar este hecho que no todos están dotados igualmente de inteligencia y voluntad, ni tampoco su desarrollo moral es el mismo; de esto resulta que, para obtener, en lo posible, la igualdad ante la ley, el derecho haya introducido distintas reglas, que sería largo enumerar, ya en lo relativo a la capacidad de las personas para obligarse, ya supliendo el discernimiento, la inexperiencia, la debilidad del sexo o la edad; con la intervención de terceras personas que de algún modo hagan el que se obtenga la igualdad ante la ley.

Una ley como la “Constitución de 1917” que carece de los caracteres esenciales de legalidad, va en contra del principio de igualdad garantizado por el artículo 13 constitucional, y aún deja de ser una disposición legislativa, en el sentido material, puesto que le falta algo que pertenece a su esencia.

Con relación a este tema, la jurisprudencia concluye lo siguiente: *“a) La ley es privativa, si la materia de que se trata desaparece después de aplicarse a un caso previsto y determinado de antemano; b) La ley es también privativa cuando menciona individualmente (nominalmente) a las personas a las que se va aplicar; c) La ley no es privativa cuando se aplica sin consideración de especie o de personas a todos los casos que previene; d) La ley no es privativa cuando comprende a un determinado número de individuos; y e) Las leyes relativas a cierta clase de personas como los mineros, los fabricantes, los salteadores, los propietarios de alguna clase de bienes no son disposiciones privativas, porque comprenden a todos los individuos que se encuentran o lleguen a encontrarse en la clasificación establecida”.*

Por otra parte, y no obstante que tal norma constitucional declara abolido el fuero, en la realidad, tenemos que subsiste el fuero de los militares y el fuero de los políticos.

Por último el artículo 31 fracción IV de la carta ilegal de 1917, asegura el principio de “igualdad” o equidad tributaria, supuesto de “seguridad” que en los hechos, tampoco es efectivo pues los gobiernos intrusos, han favorecido ilegalmente a muchas instituciones y personas.

5: DE LA NATURALEZA JURÍDICA DEL “MANDATO POLÍTICO CONSTITUCIONAL”.

El “mandato” comúnmente contenido en un documento al que se le llama “Constitución”, es un contrato por el cual una persona se encarga sin interés, por pura gracia, o por una retribución, de los negocios de otro. Los latinos lo llamamos *“mandatum”*. El origen de este tipo de contrato proviene de dos factores que son la *“debilidad”* y de la *“necesidad”* de los seres humanos por la *“igualdad”* y la *“justicia”* que citamos anteriormente. La ausencia, la indisponibilidad y los muchos impedimentos de la sociedad civil son la causa de que no se pueda ocupar de nuestros negocios de carácter colectivo, y por consiguiente que tengamos que recurrir a los demás individuos.

Los que se encargan de los asuntos de otros, generalmente lo hacen por un principio de “*honestidad*” o de “*amistad*”, y por eso sus funciones son gratuitas, pues si existiese algún salario de por medio, sería más bien un “*contrato de servicios*”, una especie de arrendamiento de capacidades y aptitudes, habilidades de ciertas personas determinadas de los contenidos en el Código Civil relativos a la categoría de domésticos, por jornal, a precio alzado en el que el operador solo pone su esfuerzo personal y que se rigen por la Legislación Federal del trabajo, de conformidad con el apartado “B” del artículo 123 del contrato celebrado con los políticos llamado “*Constitución*”.

Examinadas las condiciones del contrato de mandato constitucional, generalmente suele confiarse los negocios jurídicos propios a los amigos, o a una persona de entera confianza, ellos están obligados por honor y por deber, a ajustarse fielmente a lo que se les ha encargado. La razón dicta que pongan en el asunto todo el cuidado de que sean capaces, esto es, que lo desempeñen como lo harían por sus propios asuntos que más estimen y conforme al objeto y naturaleza del contrato. Los antiguos romanos miraban como una cosa indigna de un hombre de bien el conducirse con negligencia o el sirviente sin permiso actuara por nombre propio o se negase a devolver la materia del mandato recibía por tal infamia la calificación delictiva de hurto.

El mandato dado a los políticos no necesariamente implica servicios relacionados con el ejercicio de una profesión, no es gratuito, al contrario, es oneroso, como de propio está establecido en el artículo 35 fracción IV de su Constitución, además, es obligatorio conforme al párrafo cuarto del artículo 5º del contrato de mandato constitucional; tiene una forma escrita configurada por una escritura pública articulada llamada “*constitución política*”, es especial por que se refiere a una parte de los aspectos políticos relacionados con parte de la vida social de un pueblo. La justificación de este tipo de contrato-mandato se debe a que se realizan actos lícitos por los que la ley no exige la intervención personal y directa del interesado (de la sociedad civil).

Si el mandato dado a los políticos no es de carácter general, luego, el pueblo tiene a su favor la prerrogativa de actuar directamente en todo el universo de cuestiones que, estando o no contenidas en el “contrato-mandato constitucional”, sea su deseo el intervenir en ellas de manera personal, es decir, no hay una limitante a la autonomía de su autoridad soberana, lo que le da completa libertad para instituir con justificada razón la configuración de las proyectadas “*Constitución Social Nacional del Pueblo Mexicano y de un Poder Civil Constituyente*”.

6: DE LA SITUACIÓN DE “LOS ELECTORES”.

Tan perfectos han sido los planes de los intrusos visibles que hoy el pueblo mexicano sigue sin la autoridad soberana que se predica el artículo 39 constitucional, arrodillado, acorralado, maniatado, dividido, controlado y a merced de los dueños de los partidos políticos, de los sindicatos, de las agrupaciones campesinas, abatido por los efectos de una terrible globalización, creyendo ingenuamente que tienen una gran autoridad soberana sobre lo que pasa en el país, ignorando que en verdad están perfectamente

aislados y sin ninguna posibilidad de mantener algún tipo de unidad o de dominio sobre la situación que guardan las cosas que hacen los sirvientes a nivel nacional e internacional.

Se sostiene que tan grave situación obedece a dos estrategias que se conocen como:

1.- La Segmentación y, 2.- La Polarización

Estas formas de control son implementadas por los intrusos que surgieron de los movimientos golpistas y revolucionarios, con ellas, primero afianzar la división y encono el (rencor) entre el mercado electoral (*la mercancía electoral de los ciudadanos electores*) provocando la desunión desde las instituciones del gobierno con la ayuda de las asociaciones políticas y las instituciones electorales.

¿Qué es la Segmentación? La “segmentación” es el juego con los sentimientos del electorado, con ella se logra excitar el ánimo del ciudadano elector para que responda a los estímulos de la propaganda electoral de forma más positiva, se le pone a la percepción de sus sentidos un falso escenario, la simulación de un campo de batalla (que en realidad no existe) para que propicie sentimientos de lealtad (identificación) con un instituto político (partido) determinado, para que ponga su trinchera, se ponga un color, se enamore de una causa, de un símbolo partidario, de una sigla, de los encantos de la “venta de esperanzas” de los sirvientes políticos mercaderes.

Para justificar que en la realidad no existe tan pretendida contienda, diremos que la forma de gobierno “democrática” está perfectamente establecida en el artículo 40 de ambas constituciones (la legítima y la falsa), de tal forma que no puede haber lugar a duda a ese respecto, lo que se traduce en la sucesión o cambio de personas, mas no de sistema o régimen de gobierno.

¿Qué es la Polarización? La “polarización” por su parte, es un modelo de comunicación de las ideas que incluye un proceso definido, objetivos y metas precisas, dinámicas que deben ser conocidas y promovidas. La polarización recoge los intereses vitales (*necesidades afectivas*) de una sociedad y los entrega de vuelta al elector, a partir de un plan estratégico de confrontación comunicacional. Lo primero que se debe controlar en el mercado electoral es evitar que un solo partido monopolice al electorado, es decir, se debe fomentar al “voto *anti-partido*” que es una alternativa eficaz de oposición, de abstención y de confusión.

El ritual por el hábito del “voto utilitario” (voto egoísta-interesado) continua exaltando las ambiciones (defectos psicológicos) del electorado en buscar el máximo de beneficios en las promesas que hacen los candidatos, por cierto, los que se avizoran mediáticos mesiánicos y proféticos dan mejor resultado, las ideas se les venden e introducen a su mente por los medios de comunicación, en especial la radio y la televisión. Se abren espacios para generar sentimientos encontrados respecto de la aceptación o rechazo a la personalidad de un candidato, se venden ideas históricas de su pasado, de su vida privada y se escudriña en detalle los aspectos de sus imperfecciones, (defectos) porque al fin de cuentas, el propósito es que el elector responda a la intención de

convencerlo de dar en todas sus elecciones, todos su votos con un alto grado de sentido de lealtad inquebrantable, que siempre vea en su partido las mejores virtudes y en los demás, las peores desventajas.

En fin, se siembra y se cultiva en el electorado la imagen de una institución partidista salvadora, una especie de ego-partí-centrismo como el todo infalible en el universo, se les exaltan sus ambiciones (esperanzas), de lo que se trata es que la adhesión sea perpetua, así se garantiza la continuidad de los incautos en el juego comicial.

Ahora bien, ¿Cómo el pueblo puede deslindarse de esta situación?, ¿Qué acaso la Constitución misma no es un contrato de adhesión que hace unilateralmente el pueblo?, ¿Por qué un soberano ha de tener la responsabilidad de acudir a un proceso comicial?, eso negaría su suprema autoridad pues un soberano no puede tener responsabilidad legal, eso dañaría su jerarquía, por eso el pueblo mexicano está exento de someterse a la ley constitucional, y esto se puede probar muy fácilmente; por ejemplo: el artículo 31 de la Constitución legítima de 1857 dice: *Artículo 31.- Es obligación de todo mexicano: I.- Defender la independencia, el territorio, el honor, los derechos e intereses de su patria.* Lo anterior significa el cuidado de algunos valores o bienes jurídicos que ya son suyos y forman parte de su patrimonio adquirido; y por lo que respecta a pagar los gastos que ocasionen los servicios y los sirvientes, es de justo derecho retribuir los servicios prestados, lo que en realidad no implica un sometimiento ni a la ley ni a las autoridades.

7: DE LA SITUACIÓN DE “LOS GOBERNADOS”.

Un gobernado según P. J. Proudhon en su obra “Ideas Generales de la Revolución del Siglo XIX”, dice: *“Ser gobernado es ser vigilado, inspeccionado, espiado, dirigido, legislado, reglamentado, adoctrinado, sermoneado, censurado, es ser mandado por seres que no tienen ni título, ni ciencia, ni virtudes. Ser gobernado significa, en cada operación, en cada transacción, ser anotado, registrado, censado, tarifado, timbrado, tallado, cotizado, patentado, autorizado, apostillado, amonestado, contenido, reformado, enmendado, corregido. Es bajo pretexto de utilidad pública y en nombre del interés general, ser expuesto, monopolizado, depredado, mistificado, robado; luego a la menor resistencia, a la primera palabra de queja, reprimido, multado, vilipendiado, vejado, acosado, maltratado, aporreado, desarmado, agarrotado, encarcelado, fusilado, ametrallado, juzgado, condenado, deportado, sacrificado, vendido, traicionado y para colmo, burlado, ridiculizado, ultrajado y deshonorado. He aquí tu gobierno, he aquí tu moralidad, he aquí tu justicia, he aquí tus libertades y el bienestar de que presumes”.*

Fernando Savater en su obra “Política para Amador refiere el texto de B. Espinosa en la obra “Tratado de teología política”, y dice: *“De los fundamentos que justifican la existencia del Estado se deduce evidentemente que su fin no es dominar a los hombres ni acallarlos por el miedo o sujetarlos al derecho intereses de otros, sino por el contrario liberarlos del miedo a cada uno para que, en tanto que sea posible, viva con seguridad, esto es, para que conserve el derecho natural que tiene a la existencia en libertad, sin dueño propio ni ajeno. Repito, que no es el fin del Estado convertir a los hombres de*

seres racionales en bestias o en autómatas, sino por el contrario que su espíritu y su cuerpo se desenvuelvan en todas sus funciones y hagan libre uso de la razón sin rivalizar por el odio, la cólera o el engaño, ni se hagan la guerra con el ánimo injusto. El verdadero fin del Estado es, pues, la libertad”.

Máx Weber, en su libro “Economía y Sociedad” dice: *“Las sociedades humanas en cualquier lugar del mundo, tienen su propias razones para mantener obediencia o para estar en desacuerdo con un régimen determinado. Supone un sentimiento colectivo que propugna por superar la crisis que se le presente, y, con el objeto de evitar que se forme en torno al Estado, una costra de inamovibles especialistas en mandar, bajo la cual todos los demás tengamos que ser resignados especialistas en obedecer, se puede relativizar (subordinar) el papel de los partidos, quitándoles privilegios e importancia”.*

8: DE LA SITUACIÓN DE LA CLASE TRABAJADORA.

Los sediciosos y sus cómplices idearon los artículos 25, 26, 27 y 123 cuyo contenido difiere substancialmente de sus textos originales contenidos en la constitución de 1857.

Así, bajo el rigor del código llamado “Constitución Política de 1917” impuesto por los intrusos, particularmente lo que se refiere a los actuales artículos 25, 26, 27 y 123 se consagró el *“Sistema Capitalista Publico Monopolista del Estado”*, pues de esta forma, y bajo esas normas mañosas, los amotinados hicieron dueño al Estado, de todo el patrimonio nacional para sus particulares perversos intereses, y los de sus subordinados concesionistas privados, también capitalistas traidores, asegurando en el Código Penal sanciones a todo aquello que de alguna forma pusiera en riesgo su patrimonio privado aquel que debiese ser nacional; de esta manera se completa la primera parte del *“Sistema de Defensa Legal de los bienes de la Sociedad Política Capitalista Estatal de los Impostores”*.

En una segunda fase, por su Ley reglamentaria, la de su artículo 123 la Ley Federal del Trabajo en la que consagran las relaciones de producción capitalista se dispuso un claro *“Sistema de Explotación Asalariada”*, define los privilegios que los intrusos se auto-confieren como propietarios de los bienes del Estado, controlando en forma corporativa e institucional los derechos de asociación y de huelga de los trabajadores, convirtiéndolo en un complicado procedimiento en el que al final, solo será competencia y decisión absoluta de ellos y de los “representantes” de los trabajadores.

El fenómeno del “Control Corporativo del Estado sobre los Trabajadores” se da usando de los representantes de las agrupaciones obreras se puede comprobar fácilmente, pues el régimen legal de los Sindicatos Mexicanos está sometido al control gubernamental, prueba de ello son los artículos 365 y 366 que citan: “Para que se considere legalmente constituido un sindicato deberá registrarse ante la Junta de Conciliación y Arbitraje....., el artículo 374 define que “solo tienen personalidad jurídica y capacidad legal aquellos sindicatos legalmente registrados”; el artículo 377 obliga a los sindicatos a proporcionar informes de los cambios de dirigentes y modificación de

estatutos; el 384 obliga a las federaciones y confederaciones de sindicatos a poner en manos de la Secretaría del Trabajo su registro y legalización.

De esta manera los sindicatos quedan sometidos en forma absoluta a los intrusos que se hicieron dueños del capital público, pero, también se tenían que hacer dueños de la voluntad de los representantes de esos sindicatos, para eso se inventó una figura estructural organizativa del “Sindicato Invertido” es decir, su formación no dependería de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo y esto también se puede comprobar fácilmente, pues desde 1931 se desarrolló un tipo especial de sindicalismo, y se estableció un régimen de control corporativo de la siguiente forma:

I.- Los impostores capitalistas del monopolio de los bienes del Estado, regalaron paquetes de registro a sus “líderes” simples comparsas, traidores, serviles y dóciles que fueron centrales como la CTM, CROC, CROM, y otras.

II.- Con sus “registros” seguros, los “líderes” a espaldas de los trabajadores, en complicidad con los intrusos, se pusieron al servicio de las empresas privadas también capitalistas, como garantía de sumisión y como únicos autorizados para suscribir contratos colectivos.

Así es como se formaron los actuales “Sindicatos Carcelarios”, de esta forma es como los trabajadores quedaron fuera de todo trato con la empresa y sin vida sindical. Cualquier actitud de protesta de los trabajadores es motivo de aplicación de la temida “Cláusula de Exclusión” por parte del sindicato, de despido por parte de la empresa, de represión por parte de las instituciones del Estado de los amotinados, y en ocasiones hasta de asesinatos o encarcelamientos políticos.

Pero no todo acaba aquí, esa sumisión de los representantes sindicales al capitalismo de Estado y al privado, tenía que asegurar su supervivencia económica por la vía de la cotización obligatoria de los trabajadores a los fondos sindicales, no podía suceder como en otros países, donde los trabajadores reciben su salario íntegro y luego, ellos mismos, en forma voluntaria y consiente, separan la cantidad que corresponde a su cuota sindical, y en un acto de libre expresión de la voluntad la entrega; y cuando un trabajador no está conforme, simplemente está en libertad de cambiarse de sindicato dejar de pagar la cuota. Esto no sucede en México, porque los sediciosos idearon un “*Sistema Obligatorio de Cotización Sindical*” esto en contra de la voluntad de los trabajadores y de la prohibición del descuento al salario contenida en la fracción VI del Artículo 110 de su espuria Ley Federal del Trabajo. De esta forma, los trabajadores mexicanos nunca reciben su salario íntegro, sino que el patrón capitalista intruso que dirige el Estado confabulado con el patrón capitalista privado y los serviles “representantes” de los sindicatos, se encuentran autorizados para descontar tales cuotas que los mismos “líderes oficiales” fijan y de esta forma éstos farsantes encuentran más agradable asumir una posición cada vez más servil al patrón que les entrega físicamente el dinero de las cuotas y se olvida del interés por actuar en beneficio de los trabajadores, que en ningún caso pueden negarse a que se les haga el

descuento, en esta forma la economía sindical viene a convertirse en una fuente de enriquecimiento.

La “*cláusula de exclusión*” contenida en el artículo 395 de su Ley Federal del Trabajo, como medio de represión a favor de los “líderes” oficialistas y de las empresas públicas del Estado y Privadas de los capitalistas es sumamente grave que implica otra forma de opresión en contra de los trabajadores.

9: DE LA SITUACIÓN DE LA “SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN”.

Cabe citarles el contenido similar del artículo 39 de la Constitución de 1857, y la de Querétaro.

Artículo 39.- La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo, y se instituye para su beneficio. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.

Como se puede apreciar, existe el texto inequívoco que sin distinción cita: “*Todo poder público dimana del pueblo, y se instituye para beneficio de este*”. Gramaticalmente la palabra “beneficio” debe entenderse como sinónimo de: Servicio, favor, ganancia, provecho, utilidad.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene la función más amplia que pueda confiarse en el orden interno de una República: la de mantener el equilibrio de las fuerzas activas del gobierno; a ella está encomendada la labor de restablecer ese equilibrio cada vez que se rompe, sirviéndose para ello de su autoridad única de intérprete de la Constitución. Esta es una función pública que repara el mal y restablece el bien contenido en el derecho positivo.

Existe un principio legal que dispone que los jueces y magistrados letrados conocedores del derecho, no pueden ser políticos o hacer política, solo tienen facultades jurisdiccionales para hacer valer el derecho positivo ante cualquier arbitrariedad, pero la realidad es que se ha comprobado que ante la problemática que hemos venido planteando sistemáticamente le han dado la espalda al pueblo.

El Sistema de Justicia se hermanó al exclusivo rigor de los usurpadores, aquellos jueces y magistrados que impusieron un sistema que desde su inicio entró en una fase involutiva, en decadencia y fuera de época; su incapacidad para substanciar litigios específicos que hoy son decididos por otras autoridades no jurisdiccionales. Los jueces tradicionales se encuentran sumidos en las sombras de leyes, códigos y medios de impartición caducos, bajo un ritmo burocrático lento, papeleo excesivo, rituales exagerados y complejos, corrupción y desconfianza de las partes en esas instituciones.

La formación conservadora y ritualista los ha orientado más a una actuación mecánica de formulismos encaminados a interpretar la ley y a los legisladores que a los litigantes y al litigio en su fondo real. Los jueces no entienden que ellos no resuelven por sí

mismo ni en nombre de las partes un litigio sino en nombre del Estado. La inflexibilidad formalista de los jueces no les permite ver ni considerar la realidad social y económica ni los elementos éticos valorativos.

Los jueces por analogía (semejanza a otros casos) resuelven con base en normas expedidas con muchas hipótesis y precedentes que nacieron antes que surgiera el litigio y basados en autores hipotéticos que seguramente nunca consideraron el tipo de conflicto que se presentaría para solucionarse. ¿Qué clase de justicia puede ser ésta?

Desde el “porfiriato” hasta hoy en día, y posiblemente mucho tiempo más, las cosas no han cambiado, los supremos valores constitucionales no han sido debidamente protegidos por la justicia no se ha reprimido el despotismo, ni evitado las dictaduras de los intrusos, ni se han hecho esfuerzos por castigarlos, como de propio está dispuesto en los artículos 128 de la Constitución legítima de 1857.

¿Suprema Corte?, significa entre los mexicanos un doloroso sarcasmo (ironía), una amarga irrisión que no debemos, que no podemos a conciencia llamarla así, puesto que a través de nuestra historia judicial solo ha sido una Corte de abyección y servilismo. Esta es la verdad, de sublime, de soberana, de suprema, de justa, de noble o de algo similar, no tiene nada, en realidad tal poder no ha existido en México, solo hemos tenido un conjunto de individuos carentes de principios y decoro, nombrados por los intrusos en turno que no han hecho sino aquello que se les ordena, y es esta la llaga (la herida) moral, pública y social que debemos curar pues a ello estamos comprometidos como hijos de esta Patria.

La corrupción desenfrenada y escandalosa a la que ha llegado la justicia, es el dolor más efectivo para la conciencia, es lo que causa la mayor alerta entre los espíritus, y, a consecuencia de este tan intenso malestar, surge la insaciable sed de justicia del pueblo, lo que fue y será el fundamento más serio que ha de sustentar la legítima intervención directa de la gente. Toda esa podredumbre de los tribunales se debe en buena medida al pecado original e imperdonable de ser aliados de los intrusos y fieles devotos de su exclusiva y perversa carta constitucional de 1917. En México para ganar un pleito en un tribunal se necesita influencias, dinero o recomendaciones, si un litigante posee estas tres cosas no perderá jamás un pleito, por más injusto y absurdo que sea lo que pretenda. ¿Es que los jueces mexicanos son más bribones que los de otros países? No; lo que pasa es que la judicatura no es una carrera profesional. Los que ocupan estos puestos corren la suerte de más tarde ser echados a la calle y substituidos por otros. Esto es un mal de mayores consecuencias, debe hacerse una carrera de la judicatura, separarla de la política para con ello tener la seguridad de que habrá justicia tan pura y tan respetable como sea posible.

El artículo 128 de la Constitución de 1857 no distingue: tan gobiernos usurpadores son el de Díaz, el de Madero, el de Huerta, el de Carranza, el de Calles, hasta los más recientes del año 2006 y sucesores; porque usurpadores de las instituciones y del sentido de la ley, lo es todo gobierno o institución pública que se establezca contra los principios que sanciona el código fundamental de la República y cuya responsabilidad

se hace efectiva en los artículos 39, 40, 41, 103 y 109 de la Constitución legítima de 1857.

Se actualizan las palabras de José María Iglesias que en el libro de actas del pleno el 27 de octubre de 1876, que les dirige como una sentencia, a todos los magistrados de la Corte en donde cita:

“Señores magistrados, antes de la complicidad en el crimen, es más digno aceptar la destitución o la renuncia en el ejercicio de las funciones públicas. Ustedes han faltado al deber de salvar y hacer salva en todo caso la Constitución, cuyo cumplimiento y observancia les están encomendados. La ley misma tiene que sujetarse al examen de ustedes; ustedes juzgan la ley según el artículo 126 constitucional, luego, ¿serán ustedes parte de un poder vasallo, un poder inerme y miserable que tenga que sufrir y aceptar un trastorno público, provocado a instancia de otros? Aún el más común de los mexicanos, tiene derecho para ocurrir a ustedes contra la arbitrariedad y el despotismo, ¿no tendrá ese derecho el pueblo colectivo, el pueblo todo, cuando sus intereses sean hollados por la usurpación de otros poderes de la República? ¿Lo que es lícito a la vista de los intrusos, no será lícito al pueblo? ¿Hay amparo hasta para los criminales y no lo habrá para el pueblo soberano cuándo se le atropella y se le ultraja?. La perturbación al orden público es un crimen al artículo 128 constitucional, si uno de los poderes públicos lo comete, los demás no deben ser sus cómplices y tienen el deber de rechazar el crimen. Los poderes constitucionales tienen que conservarse incólumes, no armonizar con el gobierno intruso, ni concentrarse en éste. No hay término medio entre la complicidad y la inocencia, entre la abstinencia y la participación en el crimen. La Suprema Corte podrá vacilar y manchar su honor con la infidencia y el perjurio, burlarán las esperanzas de un pueblo, que estableció el Poder Judicial para que fuera el arca santa de la ley y la justicia; los magistrados ahora tendrán tres jueces terribles; un Dios, que es el supremo juez de la conciencia; el pueblo, que os maldecirá hasta el borde de vuestra tumba y el tribunal de la ley que se establezca cuándo se reivindique la observancia de la constitución. Los decanos de la ciencia y maestros de la ley de la Corte, cooperaron a la consumación del delito, han cooperado con solo callar y aceptar los hechos, con solo funcionar en consorcio con los usurpadores. Sabéis bien que hay delito de comisión continua, como el plagio mientras dura la víctima en poder de los bandidos. La Suprema Corte ha sido un receptor que ha venido aceptando las consecuencias, el rompimiento de los títulos legales de esta Nación, ha participado en una oligarquía liberticida y no en una República Constitucional”.

Con relación a la Procuraduría General de la República, José María Iglesias agrega:

“¿Que función más noble la de Procurador General de la Nación que el patrocinio del pueblo, cuándo es víctima del despotismo? ¿Quién será el Juez que conozca de la queja de un pueblo? y ¿Quién la parte legítima que debe pedir por el pueblo?. El Juez no puede ser otro que la Suprema Corte, y el representante del pueblo no puede ser otro que el Procurador General de la Nación cuya misión es sostenerlos fueros de la sociedad y de la República. El reo en las circunstancias actuales son los poderes

Legislativo y Ejecutivo; poderes que no son enjuiciables de hecho, pero si moralmente responsables ante la justicia del pueblo. ¿No se dice a cada funcionario que si no guarda la Carta Fundamental, la Nación le demandará su perfidia? Pues esa demanda debe ser efectiva, debe tener una fórmula; y la fórmula no puede ser otra que el pedimento del Procurador General de la República y la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La acusación del fiscal debe recaer contra el gobierno de hecho y decirles: A los ministros: En el seno del territorio mexicano se han proclamado diversos gobiernos contrarios a los principios que sanciona la Constitución. Allí se ataca la libertad y la soberanía del pueblo. Vos, Corte Suprema de Justicia, reprobad y reparar ese atentado, vos pueblo, salvad vuestra ley, y con ella vuestra honra y vuestra vida.”

Las dictaduras y las revoluciones han ignorado el camino fácil y seguro de la ley.... Fuera del camino de la ley no busquemos en engrandecimiento de nuestra patria ni la democracia. La ley no existe, no puede vivir en medio del despotismo ni la anarquía, conservémosla, salvémosla de sus encarnizados enemigos. (Termina la cita:)

La ilegitimidad de la actual Suprema Corte deviene de su pugna contra la Constitución de 1857 que previene:

“Artículo 92.- Cada uno de los individuos de la Suprema Corte de Justicia durará en su encargo seis años, y su elección será indirecta en primer grado, en los términos que disponga la ley electoral”.

Como es sabido, hoy los miembros de la Corte no son electos por seis años, ni su elección se hace con base en la Ley Orgánica Electoral del 12 de febrero de 1857, y si estas disposiciones no se respetan, su ilegalidad de origen queda demostrada plenamente. La inamovilidad de los magistrados no ha logrado destruir la “ambición”, el espíritu de intriga, el deseo de aumentarse el sueldo y hacer dispendio de recursos. La justicia, sostiene Comte, se administra según el modo cómo se haya hecho los nombramientos.

Por su parte Stuart Smill dice que: *“...nadie podría negar que la inamovilidad de los magistrados fuese un mal. Tal situación implica imponer a los pueblos la obligación de soportar a individuos gastados, ignorantes o morosos, solo porque su conducta es buena y su hogar respetable”.* Conste que en todo lo dicho aquí no se les está calificando por lo malo que se hace, sino por lo bueno que han dejado de hacer.

10: DE LA INTEGRACIÓN DE UNA “ASAMBLEA CONSTITUYENTE”.

Si examinamos como operó históricamente el pretendido “Congreso Constituyente de Querétaro”, encontramos que un solo individuo que se hacía llamar Primer Jefe del Ejército Constitucionalista Don Venustiano Carranza, el día 16 de septiembre de 1916 convocó a elecciones para integrar el Congreso Constituyente; el 1o de diciembre de 1916, dio a conocer su proyecto personal de reforma a la Constitución de 1857; ese mismo día declaró abierto el periodo de sesiones “constituyente” y dio un breve

discurso, luego, las propuestas de reforma hechas por este solo individuo entraron al estudio de los 218 “congresistas” los que se organizaron en dos grupos o comisiones; la PRIMERA COMISIÓN examinó las propuestas del proyecto en general, salvo los artículos del 94 al 107. La SEGUNDA COMISIÓN examinó las modificaciones propuestas a los artículos del 94 al 107; el 31 de enero de 1917 asistió a la clausura de dichos trabajos; el 5 de febrero él mismo promulgó la “nueva constitución”; un día después convocó a elecciones presidenciales de las que luego se auto declaró triunfador y se encargó inmediatamente de las funciones de la presidencia de la República. Así de fácil, una sola persona en menos de seis meses paso de rebelde delincuente a reformador de la Constitución y usurpador de la autoridad presidencial de la República, gobernando a este país de 1917 a 1920; aniquilando con la fuerza de las armas del Estado, a Emiliano Zapata quien lo había ayudado a usurpar el poder.

El tipo de asamblea constituyente a la que se convoque tienen una connotación “*originaria*” en la medida que surge del rompimiento de un orden, sea constitucional o no, en todo caso tiene como supuesto un rompimiento del sistema político.

PRIMERO: La asamblea constituyente tiene amplias facultades de decisión como:

- 1.- Aprobar una nueva Constitución, y de acuerdo al principio de la legitimidad democrática debe someter su texto a la ratificación por parte del constituyente primario, el pueblo, por intermedio del referéndum.
- 2.- Someter los poderes constituidos a sus dictados. Ella misma puede decidir asumir todos los poderes directamente, el sistema de gobierno es entonces de asamblea. Los poderes constituidos pasan a ser delegatarios que rinden cuenta de sus actos a la asamblea, y ella puede, cuando libremente así lo considere, removerlos.
- 3.- Decidir asumir la ratificación de los actos de la rama ejecutiva del Estado, sin destituir al jefe de Estado ni al jefe de gobierno.
- 4.- Asumir la función legislativa directamente, lo cual conlleva la disolución del Parlamento, o decide convivir con él.
- 5.- Decidir la reorganización total o parcial de la rama judicial del Estado.
- 6.- Decidir la disolución de los poderes constituidos regionales o locales, o en todo caso, su reorganización, mientras aprueba la configuración definitiva de la forma de Estado de acuerdo a la nueva Constitución.

SEGUNDO: De la Integración de una Asamblea Constituyente.

El artículo 39 constitucional nos resuelve dos preguntas ¿quién? y ¿cuándo?: 1ª.- ¿Quién?: – EL PUEBLO – Que comprende a todos los 105 millones de ciudadanos mexicanos sin excluir a ninguno. 2ª.- ¿Cuándo?: – EN TODO MOMENTO – Supone un

derecho vigente de momento en momento; pero el artículo 39 constitucional no nos resuelve una pregunta esencial: ¿Cómo?, La Constitución no nos especifica lo mecanismos para organizar el proceso constituyente – dejando por consecuencia, en libertad de decidirlo al pueblo en su investidura de soberano. Efectivamente el pueblo mexicano cuenta con 110 millones de voluntades, las que unilateralmente pueden decidir en forma libre y espontánea *“el mejor momento”* y los *“mecanismos de organización del proceso constituyente”*.

Siendo así las cosas, falta por resolver ¿cuáles? de los 115 millones que integran el pueblo soberano, han de ser los que figuren como “asambleístas”, ante el dilema de que aún éstos solo son una parte de un cuerpo soberano muy amplio. ¿Qué partes de entes individuales del cuerpo llamado ¿pueblo? son aptos para representar al conjunto de millones de partes individuales de ciudadanos?.

La respuesta es muy sencilla, hecha la convocatoria por un solo individuo soberano, cualquiera, estarán en libertad de acudir a ella quienes libremente activen su voluntad o intención de participar, pues en la ley no está regulado el hecho de que alguien sea representado en una “asamblea constituyente”, donde la ley no distingue no lo he de hacer nadie, por lo tanto los 115 millones de ciudadanos soberanos son aptos para ser constituyentes; este es un asunto más de voluntad que de selección, más político que legal.

En esta ocasión no amerita utilizar de algún proceso de selección de integrantes de la pretendida asamblea, pues todos los que concurren traerán implícita su inalienable investidura de soberanos, en eso no hay duda, además, el pueblo como parte única no puede ser dividida, es decir, auto seleccionarse a sí mismo, eso implicaría un proceso de auto discriminación que no aplicará en este caso pues, los integrantes de un pueblo soberano no puede tener la carga de pasar por hacerse auto censura de sus integrantes, o de utilizar de representantes o procuradores, sino que cada individuo deberán comparecer personalmente a hacer valer su obligación de defender la independencia, el territorio, el honor, los derechos e intereses de su patria a que se refiere la fracción I del artículo 31 constitucional; la integración de esta asamblea no admite representaciones, es decir, todos los congresistas habrán de tener investidura de soberanos, por la razón lógica de que un representante no es soberano, éste solo lograría la deslegitimación de la asamblea, puesto que el poder soberano de alterar o modificar la forma de gobierno es estrictamente INALIENABLE (no se transfiere), es pleno, indiviso, permanente, intransferible e imprescriptible.

TERCERO: De la integración de las instancias de la constituyente.

Una ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE compuesta por: Un número indeterminado de ciudadanos mexicanos propietarios de un universo de 115 millones, que libremente acudan por cada una de las 26 entidades federativas sin necesidad de suplentes. Cada integrante tendría el deber de defender en la asamblea, las propuestas que se reciban de la Asamblea Nacional de Proponentes, aquellos que por algún motivo cualquiera no puedan estar presentes en la sede del Congreso.

Una ASAMBLEA NACIONAL DE PROPONENTES compuesta por: 115 millones de potenciales proponentes distribuidos en todo el territorio nacional. Su atribución será la de remitir propuestas a la asamblea constituyente, de temas, ponencias, ensayos, tesis, reportes, etc., a integrar en la agenda constituyente. Así, a través de las propuestas recibidas por la asamblea, es como ha de quedar cumplido el ideal de la mejor expresión de la participación popular, en el aporte de las mejores ideas para resolver la difícil situación por la que atraviesa el País.

CUARTO: De la Cronología, agenda y tiempos de duración que corresponden a la Asamblea Constituyente:

Según la urgencia y la importancia de la labor de la asamblea nacional constituyente han planteado sus proponentes un período de duración que va generalmente de seis meses a un año. El período de duración de la asamblea no es vinculante para ella. En uso de sus atribuciones, como cuerpo constituyente puede modificarlo. También tiene plena libertad en la aprobación de sus reglamentos internos, y puede dotar a sus representantes de prerrogativas parlamentarias.